

Declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe

Declaration of the III Regional Conference on Higher Education for Latin America and the Caribbean

Declaração da III Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe

CRES 2018



IESALC

Organización
de la Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Instituto Internacional para
la Educación Superior
en América Latina y el Caribe

TABLA DE CONTENIDO

III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe

| | |
|--|----|
| Presentación de la CRES 2018 | 4 |
| Declaración de la CRES 2018 | 6 |
| Ejes temáticos de la CRES 2018 | 10 |
| Consideraciones finales | 26 |
| Carta de las Universidades e Instituciones de Educación de los Pueblos Indígenas (RUIICAY) | 27 |

TABLE OF CONTENT

Third Regional Conference on Higher Education for Latin America and the Caribbean

| | |
|--|----|
| CRES 2018 Presentation | 30 |
| CRES 2018 Declaration | 32 |
| CRES 2018 Thematic axes | 36 |
| Final considerations (or concluding remarks) | 52 |
| Letter from the indigenous peoples' universities and institutions of education (RUIICAY) | 53 |

TABELA DE CONTEÚDO

III Conferência Regional de Educação Superior para a América Latina e o Caribe

| | |
|--|----|
| Apresentação da CRES 2018 | 56 |
| Declaração da CRES 2018 | 58 |
| Eixos temáticos da CRES 2018 | 62 |
| Considerações finais | 77 |
| Carta das Universidades e Instituições de Educação dos Povos Indígenas (RUIICAY) | 78 |

PRESENTACIÓN DE LA CRES 2018

Las Conferencias Regionales de Educación Superior (CRES) han sido convocadas por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, con una periodicidad aproximada de diez años. La primera Conferencia tuvo lugar en La Habana, Cuba, en 1996. La segunda se efectuó en Cartagena de Indias, en 2008. El 15 de junio de 2016 se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de Argentina, lo que permitió la celebración de la Tercera Conferencia Regional del 11 al 14 de junio de 2018 en el marco del centenario de la Reforma Universitaria de 1918.

Los objetivos de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) reflejaron un constante proceso de estudio y reflexión sobre la educación superior de América Latina y el Caribe. Así, la Conferencia de Córdoba tuvo como propósitos (a) contribuir con la consolidación de los sistemas de educación superior en la región y (b) generar espacios de investigación e innovación para el desarrollo humano, la convivencia democrática y la ciudadanía, sobre principios de tolerancia, solidaridad y compromiso social. De ella se derivan la Declaración de la CRES 2018 como un instrumento orientador de los lineamientos estratégicos del sector y el Plan de Acción, con su respectiva hoja de ruta. La Conferencia de Córdoba se sustentó en siete ejes temáticos, en cada uno de los cuales participaron investigadores de toda América Latina y el Caribe.

Durante las etapas previas a la Conferencia de Córdoba, se realizaron encuentros temáticos preparatorios, foros virtuales, reuniones, seminarios, eventos y una amplia gama de mecanismos de consulta y análisis, para incluir todas las visiones posibles y darle cabida a la mayor cantidad de actores, instituciones y gobiernos interesados. En la Conferencia misma participaron aproximadamente 12 mil personas, de manera presencial y virtual.

El programa general se organizó en conferencias centrales, foros, simposios sobre los ejes temáticos de la Conferencia y mesas de debate. La CRES 2018 contó con un programa de actividades complementarias, presentaciones de libros y encuentros de asociaciones, autoridades, redes universitarias y redes temáticas.

En la ceremonia de clausura de la CRES el director de UNESCO-IESALC, Pedro Henríquez Guajardo; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, y el coordinador general de la CRES 2018, Francisco Tamarit, leyeron el preámbulo de la Declaración. Luego de concluida la CRES 2018 se inició el proceso de formulación del Plan de Acción 2018-2028 con un equipo multidisciplinario, que ha sistematizado resultados a partir de la Declaración, documentos propositivos y otros documentos oficiales emanados de la Conferencia regional.

El Plan de Acción supone la apertura prospectiva del decenio 2018-2028 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda de Educación 2030 de la UNESCO. Es un proceso de producción colectiva que ha sido pensado en todas sus etapas, acciones y estrategias. Su adopción definitiva ocurrirá en la IX Reunión de Redes Universitarias y Consejos de Rectores que convocará UNESCO-IESALC en el mes marzo de 2019.

Este Plan de Acción CRES 2018 es el resultado de un riguroso proceso gerencial, académico y técnico que será el aporte regional de América Latina y el Caribe para la próxima Conferencia Mundial de Educación Superior.

El presente documento contiene el texto de la Declaración de la Conferencia Regional, los resúmenes de los ejes temáticos y la Carta de las Universidades e Instituciones de Educación de los Pueblos Indígenas leída en la clausura de la Conferencia Regional.

Pedro Henríquez Guajardo
Director de UNESCO-IESALC



DECLARACIÓN DE LA CRES 2018

Mujeres y hombres de América Latina y el Caribe:

Los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sostenible.

Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos. Porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social.

Los universitarios de hoy, como los de hace un siglo, nos pronunciamos a favor de la ciencia desde el humanismo y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todas y todos.

La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe refrenda los acuerdos alcanzados en las declaraciones de La Habana (Cuba) de 1996, de la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998 y de Cartagena de Indias (Colombia) de 2008 y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado. Estos principios se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña.

Reivindicamos la autonomía que permite a las instituciones de educación superior (IES) ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos, las creencias religiosas, el mercado o los intereses particulares. La defensa de la autonomía de las IES

es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la educación superior.

Pensar que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente. Ellas deben ser así un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas sin distinción social, género, etnia, religión ni edad. El diálogo de saberes para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas.

Las diferencias económicas, tecnológicas y sociales entre el norte y el sur, y las brechas internas entre los Estados no han desaparecido, sino que han aumentado. El sistema internacional promueve el libre intercambio de mercancías, pero aplica excluyentes regulaciones migratorias. La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades y la desigualdad que afecta, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes.

La desigualdad de género se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión en el Estado o en las empresas. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes muestran los peores indicadores de pobreza y marginación.

La ciencia, las artes y la tecnología deben constituirse en pilares de una cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas en procesos de consolidación de un bloque económicamente independiente y políticamente soberano.

Las débiles regulaciones de la oferta extranjera han profundizado los procesos de transnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, impidiendo, cuando no cercenando, en muchos casos, el efectivo derecho social a la educación. Es fundamental revertir esta tendencia e instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de los otros niveles del sistema educativo.

La educación no es una mercancía. Por ello, demandamos a nuestros Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo, o alienen formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo. En este contexto, instamos a incrementar los recursos destinados a la educación, la ciencia, la tecnología y las artes.



Es imprescindible que los Estados asuman el compromiso irrenunciable de regular y evaluar a las instituciones y carreras, de gestión pública y privada, cualquiera sea la modalidad, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y el egreso de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión y pertinencia local y regional.

De manera similar al año 1918, actualmente “la rebeldía estalla” en América Latina y el Caribe, y en un mundo donde el sistema financiero internacional concentra a las minorías poderosas y empuja a las grandes mayorías a los márgenes de la exclusión y la precariedad social y laboral.

Con todo y los enormes logros que se han alcanzado en el desarrollo de los conocimientos, la investigación y los saberes de las IES y de los pueblos, sectores importantes de la población latinoamericana, caribeña y mundial se encuentran sin acceso a los derechos sociales básicos, al empleo, a la salud, al agua potable y a la educación, entre otros.

En pleno siglo XXI, millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos, siguen excluidos del progreso social, cultural, económico y tecnológico. Aún más, la desigualdad regional y mundial es tan pronunciada, que en muchas situaciones y contextos existen comunidades que no tienen acceso a la educación superior, porque esta aún sigue siendo un privilegio y no un derecho, como anhelaron los jóvenes en 1918.

En el Centenario de la Reforma, no somos ajenos al sufrimiento humano ni al mandato de la historia. No podemos seguir indiferentes al devenir del orden colectivo, a la lucha por la verdad heroica y al anhelo trascendente de la libertad humana. La educación superior debe constituirse desde los liderazgos locales, estatales, nacionales e internacionales, tal y como ahora están aquí representados plenamente. Desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y la responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación superior pública gratuita y de amplio acceso.

En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la UNESCO (Agenda Educación 2030), instamos a los Estados a promover una vigorosa política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, la generación de políticas de acción afirmativas —sobre la base de género, etnia, clase y discapacidad— para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.

En este contexto, los sistemas de educación superior deben pintarse de muchos colores, reconociendo la interculturalidad de nuestros países y comunidades, para que la educación superior sea un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios. No podemos callarnos frente a las carencias y los dolores del hombre y de la mujer, como sostuvo Mario Benedetti con vehemencia, “hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio”.



Hace un siglo, los estudiantes Reformistas denunciaron con firmeza que en una Córdoba y en un mundo injusto y tiránico, las universidades se habían convertido en el “fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”. Ha pasado el tiempo y ese mensaje cargado de futuro nos interpela y nos atraviesa como una flecha ética, para cuestionar nuestras prácticas. ¿Qué aportamos para la edificación de un orden justo, la igualdad social, la armonía entre las Naciones y la impostergable emancipación humana?; ¿cómo contribuimos a la superación del atraso científico y tecnológico de las estructuras productivas?; ¿cuál es nuestro aporte a la forja de la identidad de los pueblos, a la integridad humana, a la igualdad de género y al libre debate de las ideas para garantizar la fortaleza de nuestras culturas locales, nacionales y regionales?

Es imperioso e indispensable que hoy nuestras instituciones de educación superior se comprometan activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica. Debemos educar a los dirigentes del mañana con conciencia social y con vocación de hermandad latinoamericana y caribeña. Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

La educación superior a construir debe ejercer su vocación cultural y ética con la más plena autonomía y libertad, contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y anhelados cambios de nuestras comunidades. La educación superior debe ser la institución emblemática de la conciencia crítica de nuestra América Latina y el Caribe.

Las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas y caribeñas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región.

Expresamos nuestra solidaridad con las juventudes de América Latina, el Caribe y el mundo, cuyas vidas celebramos; y reconocemos en sus luchas y anhelos, nuestras propias aspiraciones a favor de la transformación social, política y cultural.

La tarea no es simple, pero es grande la causa e ilumina el resplandor de su verdad. Se trata, como profetizó el Manifiesto Liminar, de mantener alto el “sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad”.

Mujeres y hombres de América Latina y el Caribe: miremos hacia el futuro y trabajemos sin pausa en la reforma educacional permanente, en el renacer de la cultura y de la vida de nuestras sociedades y pueblos.



EJES TEMÁTICOS

Educación superior como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe

La educación superior es hoy una aspiración sentida de los jóvenes que egresan de la educación media y de muchos adultos que no lograron acceder oportunamente a este nivel educacional. La demanda creciente por acceder a la educación superior exige que esta se haga cargo de múltiples necesidades y, por tanto, que diversifique su oferta en distintos tipos de instituciones, de programas, de modalidades de enseñanza–aprendizaje, de estrategias formativas. Hoy, cuando hablamos de educación superior, nos referimos a un conjunto amplio y diverso, que va mucho más allá de nuestra concepción tradicional, en que identificábamos educación superior con universidad.

En este contexto, la articulación de la educación superior con los otros niveles del sistema educativo se hace imprescindible. Sin embargo, la educación superior, aunque critica la formación de los estudiantes que recibe, no asume cabalmente su compromiso, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de la formación de docentes. Este es un aspecto crítico que es preciso abordar, tanto desde el punto de vista de las instituciones de educación superior como desde el correspondiente a las políticas públicas: para las primeras, es necesario priorizar una formación de calidad, centrada en las necesidades vigentes de los niños y jóvenes. Las autoridades públicas, por su parte, deben hacerse cargo del diseño e implementación de políticas que revaloricen la profesión docente, reconozcan su centralidad y recompensen adecuadamente el desempeño educativo.

Se hace también fundamental abordar el tema de la calidad, en un contexto de diversidad. Esto exige definir calidad con la participación de los principales actores sociales, establecer indicadores apropiados a las características de los propósitos formativos de las instituciones, incluyendo como valores la inclusión, la diversidad



y la pertinencia. Se deben diseñar políticas y mecanismos que no se limiten a evaluar sino también a promover la calidad y apoyar a las instituciones para que sean ellas las que, en ejercicio de una autonomía responsable, asuman el compromiso de avanzar de manera sostenida en su capacidad de respuesta a las necesidades de los estudiantes y del entorno social en que se desempeñan.

Para que la educación superior contribuya cada vez más al buen vivir de la región es necesario promover también la articulación entre las instituciones de educación superior y de estas con los diversos sectores sociales y asegurar oportunidades formativas para todas y todos a lo largo de la vida.

1. Los gobiernos y las instituciones de educación superior deben procurar acuerdos, programas y arreglos institucionales que reconozcan conocimientos, competencias y estudios previos, así como las respectivas credenciales y certificaciones, adquiridas en el mismo o en otros sistemas de educación superior, en educación media o en el medio laboral, propiciando iniciativas que impulsen la formación a lo largo de la vida, superando los currículos terminales.
2. Es necesario atender desde el inicio las necesidades reales de los estudiantes, sobre la base de las expectativas que de ellos demandan las instituciones de educación superior. Se deben generar procesos que faciliten la transición entre la educación media y la superior, con programas vocacionales, de apoyo y de nivelación, a través de rediseños curriculares.
3. La flexibilización de los currículos es perentoria. Es necesario revisar las estructuras curriculares a fin de orientarlas por competencias, reducir los contenidos en la formación de pregrado y ampliar las oportunidades en postgrado. El resultado de esta revisión debe derivar en trayectorias formativas abiertas (como la acreditación de módulos y no de asignaturas) y orientarse al reconocimiento de cualificaciones constatables.
4. Los Estados y las instituciones de educación superior deben desarrollar estrategias de vinculación y programas colaborativos, a nivel de pre y postgrado garantizando los recursos para la innovación, la ciencia, la tecnología y la investigación, y así evitar la desvinculación entre la educación superior y el entorno productivo.
5. La acreditación debe fundamentarse en evaluaciones simultáneas de las carreras dentro de la misma área del conocimiento, integrando la institucional (aspectos financieros, administrativos y gerenciales) y la académica (formación profesional) a fin de realizar análisis comparativos y propiciar mecanismos de regulación y evaluación de las agencias de acreditación, con el propósito de asegurar criterios internacionales de credibilidad y eficacia.



Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina

Las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. Resulta imperativo que se garanticen los derechos de todos los grupos de población discriminados por raza, etnicidad, género, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y desplazamiento forzado. Es ineludible que se destinen recursos financieros y esfuerzos de investigación, docencia y extensión/vinculación a estos fines.

Es necesario promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es solo incluir en las instituciones de educación superior a mujeres, personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes e individuos de grupos sociales históricamente discriminados, sino transformarlas para que sean social y culturalmente pertinentes. Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales.

Es ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas. Todo esto debe ser garantizado por políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad apropiados, para lo cual deben utilizarse indicadores específicos e impulsar la participación libre e informada de representantes de estos grupos de población.

La educación no es solo un derecho humano sino también un derecho de los pueblos. Existe una importante deuda histórica de los Estados y sociedades latinoamericanas y caribeñas con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Si bien sus derechos son reconocidos en numerosos instrumentos internacionales y en la mayoría de las constituciones nacionales, existe un alarmante déficit en el disfrute efectivo de los mismos, incluso en la educación superior. Las instituciones de educación superior deben garantizar el disfrute efectivo de estos derechos y educar a la población en general, y particularmente a sus comunidades, contra el racismo y todas las formas de discriminación y formas conexas de intolerancia.

Es fundamental promover y facilitar el aprendizaje de las lenguas de pueblos indígenas y afrodescendientes y su uso efectivo en las prácticas de docencia, investigación y extensión. La formación de docentes interculturales bilingües para todos los niveles de los sistemas educativos es un deber prioritario de la educación superior.



1. Las instituciones de educación superior (IES) tienen la obligación jurídica, ética, social y política de aplicar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de manera efectiva.
2. Las instituciones de educación superior tienen la obligación de educar respecto de la aplicación de derechos, contra el racismo y todas las formas de discriminación racial y formas conexas de intolerancia a la población en general; particularmente, a sus propios docentes, investigadores, funcionarios y directivos, así como a quienes brindan formación profesional, científica y humanística.
3. Las políticas públicas e institucionales de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, discriminación y todas las formas de intolerancia que aún están vigentes en las sociedades latinoamericanas.
4. Es imperativo que las políticas públicas e institucionales garanticen no sólo los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino también los derechos de todos los grupos de población frecuentemente discriminados respecto a referentes de género, raza, etnicidad, religión, edad, situación socioeconómica, orientación sexual, discapacidad/capacidades especiales y situaciones de desplazamiento forzado. Es ineludible que las instituciones de educación superior orienten esfuerzos de investigación, docencia y extensión/vinculación a estos fines.
5. Las IES deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es imperativo incorporar los conocimientos, saberes tradicionales, valores, sistemas lingüísticos, cosmovisiones, formas de aprendizaje, y modos de producción de conocimientos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que esto se realice con la participación informada y activa de representantes de dichos pueblos.
6. Las políticas públicas e institucionales de educación superior deben promover y facilitar el aprendizaje de las lenguas originarias americanas.
7. Las políticas públicas y los mecanismos de acreditación institucional de la educación superior deben reconocer y valorar las experiencias de las instituciones de educación superior de pueblos indígenas y afrodescendientes, sus contribuciones a la resolución de importantes problemas sociales y sus innovaciones educativas. Para ello deben incorporar en su definición, indicadores específicos y asegurar la inclusión informada y oportuna de profesionales y representantes de dichos pueblos en los procesos de evaluación y acreditación.



La educación superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad” (CEPAL, 2016) constituye uno de los fundamentos para el necesario cambio social y económico. Su logro se relaciona con el desarrollo de competencias que permitan a la región, sus países y ciudadanos, actuar con pertinencia en escenarios complejos e insertarse de forma efectiva en una dinámica mundial basada en el conocimiento. Esto demanda cambios en los sistemas educativos y en las instituciones, que consideren la cooperación, la construcción solidaria de saberes y la transferencia de recursos entre regiones, países e instituciones. En la región, la internacionalización debe propugnar una cooperación interinstitucional basada en una relación solidaria entre iguales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y la integración regional. Debe promover el diálogo intercultural, respetando la idiosincrasia e identidad de los países participantes, fomentar la organización de redes interuniversitarias y fortalecer las capacidades nacionales mediante la colaboración interinstitucional y la interacción con pares académicos a escala regional e internacional. Esto propiciará la circulación y la apropiación del conocimiento como bien social estratégico, en favor del desarrollo sostenible de la región y el de sus países.

En este contexto, la internacionalización se constituye en una herramienta clave para transformar la educación superior, fortalecer sus comunidades y promover la calidad y pertinencia de la docencia, la investigación y la extensión. Favorece la formación de ciudadanos y profesionales, respetuosos de la diversidad cultural, comprometidos con el entendimiento intercultural, la cultura de paz y con capacidad para convivir y trabajar en una comunidad local y mundial. Su antítesis sería la concepción de una internacionalización mercantilista que favorezca los intereses hegemónicos y desnacionalizadores de la globalización.

El cumplimiento de todos estos objetivos requiere estrategias sistémicas, integrales, comprehensivas y transversales a todas las políticas de desarrollo institucional. Asimismo, se precisan políticas públicas que apoyen el proceso de internacionalización mediante el establecimiento de marcos organizacionales que faciliten la integración académica regional, la movilidad de estudiantes y académicos, el reconocimiento de trayectos formativos internacionales, la dimensión internacional de los programas académicos y la colaboración internacional en investigación, entre otros.

1. Reconocemos una internacionalización humanista y solidaria que contribuya a un mayor y mejor entendimiento y cooperación entre las culturas y las naciones, a partir de una colaboración interinstitucional fundamentada en la solidaridad y respeto mutuo.
2. Los hermanamientos entre las universidades y otras instituciones de educación superior nutren la creación, fortalecimiento y consolidación de las capacidades



nacionales de los países involucrados. Se garantiza así la diversidad de fuentes académicas en los campos de la investigación y producción de conocimiento, a escala regional y global.

3. Las instituciones de educación superior contribuyen al diseño consensuado de proyectos de nación desde sus propios proyectos educativos, comprometiendo todo su quehacer docente, de investigación y de servicios.
4. La internacionalización se convertirá en una palanca para transformar el sector educativo terciario con estrategias sistémicas, integrales, comprehensivas y transversales permeando todas las políticas de desarrollo institucional en torno a los contenidos y estructuras curriculares.
5. La internacionalización es un medio estratégico para la producción de conocimiento con una perspectiva basada en la colaboración internacional. Es un proceso para innovar y mejorar la calidad y pertinencia de la educación terciaria con el desarrollo de competencias globales e interculturales en los estudiantes.
6. Las políticas públicas e institucionales son determinantes para consolidar la institucionalización de la dimensión internacional en el quehacer universitario y en los tres niveles del proceso educativo: el micro (proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula), el mediano (estructura y contenido curriculares), y el macro (diseño de políticas institucionales sobre docencia, investigación y difusión).
7. La dimensión internacional es un componente intrínseco de las políticas científicas nacionales y de los instrumentos de desarrollo científico e investigativo bajo esquemas colaborativos hacia la integración regional, mediante:
 - a) el fomento y financiamiento de la internacionalización de la investigación,
 - b) el aumento y consolidación del capital de relación internacional de los investigadores,
 - c) la introducción de la dimensión internacional en los programas de posgrado para la formación de investigadores,
 - d) el mejoramiento de la calidad, la pertinencia, la productividad y la visibilidad de la investigación.
8. La internacionalización de la educación superior se consolidará a partir de una política y estrategia regional de desarrollo científico, que permita coordinar esfuerzos, potenciar los recursos y multiplicar los programas.
9. Los gobiernos de la región requieren impulsar, profundizar y consolidar la voluntad política hacia la integración regional. En relación con la educación supe-



rior es imperativo una articulación permanente entre las políticas públicas y las institucionales para construir una comunidad académica regional que respete la diversidad y simultáneamente reconozca la validez de los otros sistemas e instituciones.

10. En la educación superior regional es imprescindible establecer políticas, estructuras coordinadoras, programas de alcance regional y la correspondiente estructura financiera para fortalecer y extender los esfuerzos integracionistas, el trabajo cooperativo y los programas de los distintos consejos y asociaciones de universidades nacionales, regionales e internacionales, organismos internacionales e IES.
11. Es imperativo incrementar la movilidad estudiantil intrarregional mediante iniciativas inclusivas y esquemas de financiamiento que alcancen a todos los países de la región, posibilitando la incorporación de aquellos estudiantes desfavorecidos.
12. La flexibilización de los programas y planes de estudio, su reconocimiento y la coordinación de los calendarios académicos, son condiciones básicas para el crecimiento de la movilidad de la educación superior regional.

El rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe

De cara a los desafíos sociales que enfrenta la región, la educación debe construir su calidad y universalidad en el servicio a la comunidad local, en miras al desarrollo humano de cada entorno, articulando tradición e innovación de punta, congregando la pluralidad de competencias, habilidades y conocimientos que las personas construyen, en la convergencia de la actividad especializada, la vida cotidiana, las sabidurías populares y una auténtica inteligencia ética y estética en armonía territorial más allá de cualquier impacto. Es imperioso considerar igualmente a todos como personas únicas e inacabadas, como facilitadores del cambio y como agentes de su propio desarrollo mediante la generación de mecanismos para el crecimiento personal y social, y para la constitución de comunidades. Es decir, la educación superior es co-creadora de conocimiento e innovación, haciendo de estos, como saberes articulados a prácticas sociales, herramientas de independencia intelectual, transformación social y construcción de estructuras políticas más justas, equitativas, solidarias y, sobre todo, subsidiarias de valores compartidos autóctonos. La región debe ser promotora de ciencia para todos, ciudadanía crítica y gobernanza auténtica, democrática y transparente, para hacer efectiva la construcción de relaciones territoriales rehumanizadoras con todos los actores, mejorando los niveles de comunicación entre ellos y haciendo posible la elección de los mejores aportes, lo cual genera relaciones de corresponsabilidad que facilitan el buen vivir.



1. La responsabilidad social de las instituciones de educación superior exige una nueva relación con la sociedad y postula una transformación innovadora de la educación superior.
2. El enfoque limitado de proyección social y extensión universitaria, que les visualiza como apéndices de la función central de formación estudiantil y producción de conocimientos, debe superarse cualitativamente e identificar el compromiso social de la educación superior consistentemente con las nuevas realidades de la sociedad.
3. El compromiso social de la educación superior se apoya en la promoción de una educación de calidad para todos. Implica fomentar la educación para toda la vida, considerando al estudiante como un aliado permanente de un proceso en el que su conocimiento y sus competencias están al servicio de la transformación social para el bien de todos, en especial de los sectores más vulnerables.
4. La educación superior está llamada a revisar profundamente sus acciones, a fin de orientar a la sociedad y así contribuir a resolver los problemas crónicos que la aquejan. Las instituciones de educación superior deben comprometerse con los grupos sociales que enfrentan diversas situaciones de vulnerabilidad, a través de proyectos de inclusión, de combate a la pobreza, de innovación y emprendedurismo social, en pro de la justicia social. En tal contexto, la relación de las instituciones de educación superior con la sociedad, enlazada con el bien común, subraya la necesidad de actuar con la totalidad de los actores –instituciones o personas–.
5. La responsabilidad social de la educación superior supone desarrollar compromisos territoriales y transformadores, bajo la perspectiva de una comunidad académica expandida, en la que el egresado es un aliado y transformador social. En ella, el conocimiento, la formación y la acción se imbrican para lograr un desarrollo verdaderamente justo y sostenible.
6. La formación en las instituciones de educación superior es un ejercicio permanente de rehumanización.
7. Las instituciones de educación superior deben vincularse con la sociedad para crear y diseñar conjuntamente nuevos escenarios de generación democrática de conocimiento superando la visión disciplinaria y catedrática de la educación.

La Investigación científica y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe

No habrá justicia en la región si no hay libertad de pensamiento y expresión para la sociedad en su conjunto; y, no existirá libertad de pensamiento si nuestros países no generan conocimientos pertinentes para sus realidades e innovaciones sociales que transformen su matriz productiva primario exportadora y secundario importadora, y disputen el



orden imperante. Reivindicar soberanía para imaginar, crear, acceder y aplicar los conocimientos que necesitamos para la vida buena en nuestras sociedades es imperativo en donde las instituciones de educación superior juegan un rol estratégico. No se puede pensar en una estrategia que separe la superación de distancias cognitivas injustas sin que a la par se abran nuevas rutas epistémicas. Estas nuevas rutas demandan romper con la matriz de pensamiento (neo)colonial, (neo)dependiente, antropocéntrico, racista y patriarcal que impera aún en nuestras sociedades. Solo si el aprendizaje de lo conocido y la generación de nuevos conocimientos se reconcilian, si la teoría y la práctica van de la mano, el conocimiento apuntalará la justicia social. Para entender la dimensión del cambio que requiere la matriz epistémica debemos remitirnos a la gestión de la ciencia y los conocimientos en el sistema de acumulación vigente en el mundo. Esta gestión se basa en la construcción de un pensamiento hegemónico, en el cual la función exclusiva de la ciencia es la acumulación de capital a través de la producción de innovación tecnológica patentada solo con fines mercantiles. Romper esa lógica implica reconocer los conocimientos como derechos humanos universales y derechos colectivos de los pueblos, como bienes públicos sociales y comunes para la soberanía, buen vivir y emancipación de nuestras sociedades, y para la construcción de la integración latinoamericana y caribeña. En otras palabras, debemos reconocer que el conocimiento es producto del acervo intelectual y experimental de la humanidad, siendo por tanto un bien común, y por regla general de dominio público.

El quiebre epistémico señalado implica reconocer el rol estratégico de las artes y la cultura en el proceso de producción de conocimientos con compromiso social, en la lucha por la soberanía cultural y la integración pluricultural de las regiones.

La disputa política sobre 'qué conocimientos' es a la vez la disputa política sobre 'qué sociedad', 'qué región' queremos. No habrá transformación de los conocimientos sin un cambio en las relaciones históricas de poder en América Latina y el Caribe; no obstante, tampoco habrá cambio en las relaciones históricas de poder en la región sin una transformación de los conocimientos.

1. Los conocimientos son un derecho humano universal y un derecho colectivo de los pueblos, un bien público social y común para el buen vivir, la soberanía y la emancipación de nuestras sociedades, en la construcción de la ciudadanía latinoamericana y caribeña.
2. Se replantea la función social de la ciencia y los conocimientos para garantizar la sostenibilidad, la paz, preservar la diversidad cultural, la democracia, la convivencia humana y la reproducción de la vida.
3. Los conocimientos son recursos comunes y bienes públicos por lo tanto es exigible por parte de la sociedad la democratización de su acceso, su uso y su aprovechamiento. La equidad de género, étnico-racial, de pueblos y nacionalidades, se garantiza en el acceso universal al sistema de ciencia, tecnología e innovación y en la participación efectiva en la generación de conocimientos de todos los actores del sistema.

4. La promoción del desarrollo tecnológico, la investigación científica responsable y la construcción de redes de conocimiento interinstitucionales, con enfoques trans e interdisciplinarios, garantizan la calidad y el rigor teórico-metodológico.
5. El desarrollo de ecosistemas de innovación sociotécnica se apoyará en la transferencia de tecnología, la desagregación tecnológica y el cierre de brechas cognitivas.
6. El desarrollo humano, social, económico y cultural de ALC impone recuperar, revalorizar y proteger los conocimientos tradicionales y ancestrales en el marco del respeto a la diversidad, la equidad epistémica y el diálogo de saberes.
7. El impulso hacia una gestión de los conocimientos orientada a la construcción soberana, libre y colaborativa de la ciencia, para avanzar en la construcción regional de conocimiento propio en un contexto de mayor integración de los actores de la educación superior.
8. La región demanda nuevos y adecuados procesos de evaluación, de producción y difusión de los conocimientos, con estándares de pertinencia.
9. Los procesos de formación a nivel de posgrados orientados a la investigación científica y tecnológica en la región se potenciarán con un enfoque de pertinencia social.
10. El uso estratégico del sistema de propiedad intelectual está directamente vinculado a la recuperación del sentido público y común de los conocimientos y las tecnologías.

El papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe

El desarrollo sostenible es una forma de pensamiento que proyecta al hombre en una mejor relación con el contexto, un imperativo categórico que establece el valor ético de la convivencia en el mundo. Su desempeño debe responder a las demandas sociales que requieran conocimientos técnicos, eficientes, oportunos y cuya aplicabilidad apunten hacia la superación de los conflictos y situaciones de afectación social para alcanzar el bienestar común. Esta fundamentación establece el pensamiento sostenible como una construcción epistémica de las ciencias sociales, integrada, compleja, interdisciplinaria, universal y transformadora de alto contenido económico, social y ambiental para enfrentar la crisis civilizatoria. Se fundamenta en la interpretación de la realidad de los hombres con enfoques multidimensionales de sus problemas para intervenir de

acuerdo con la gestión de riesgo en términos de una mejor convivencia. Por ello sus principios se basan en el humanismo, en el bien público, derecho humano y la base para garantizar la realización de otros derechos.

La educación está inmersa en valoraciones éticas, por ello sociedad y educación se articulan en una construcción indisoluble del pensamiento social y complejo que se expresa a través de los objetivos de desarrollo sostenible, y particularmente con el objetivo 4, de la Agenda de Educación 2030 de la UNESCO. Este objetivo “garantiza una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Entonces, la dinámica del pensamiento social orienta la discusión sobre educación superior bajo las consideraciones del pensamiento sostenible con enfoques multidisciplinarios y dimensiones que definen su actuación pedagógica, en términos de la gratuidad, la equidad, la calidad, el aprendizaje pertinente y efectivo, la accesibilidad, la empleabilidad, la igualdad de género, el reconocimiento a la diferencia, el desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sociedad y educación superior asentados sobre el pensamiento sostenible deben estar conscientes de las dificultades, sobre todo en la realidad actual, constantemente cambiante, que impone grados de incertidumbre, de ambigüedad y de complejidad. Es la hora de que los académicos, los científicos y todos los miembros de la sociedad dialoguen, es el tiempo de revisar las estructuras de las instituciones, de innovar en sus compromisos y las formas de lograrlos. La meta de la educación superior es la formación de un ciudadano con un pensamiento sostenible, que sea el motor de la nueva sociedad.

Bajo esta interpretación, la educación superior de América Latina y el Caribe en su condición de bien público social-estratégico, derecho humano y universal, y deber del Estado, adquiere nuevas funciones, distintos valores, diferentes retos, inéditos compromisos y un papel estratégico en el desarrollo sostenible. Las instituciones de ES deben establecer vínculos más estrechos con los contextos a los que pertenecen, de forma tal que sean más pertinentes y responsables con la sociedad. Deben participar del avance social, de la generación de riqueza, de una cultura de paz, de integración y de identificación social, de lucha contra el hambre y la pobreza, del crecimiento de las identidades. Así mismo, debe ser proactiva en la prevención del cambio climático y de la crisis energética.

Estos amplios y exigentes desafíos hacen que las instituciones de ES se conviertan en organizaciones estratégicas para el desarrollo de los países, específicamente de ALC. Son estas instituciones, en gran parte, las que contribuirán a disminuir y superar las brechas existentes entre los países, en las áreas de la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura.

La idea de la sostenibilidad como principio es que el conocimiento que se genera en los espacios académicos pueda introducirse, utilizarse y adaptarse a las metas sociales, eco-

nómicas y ambientales que beneficien a todas las personas, para construir los mecanismos para vivir bien y tener mejores sociedades. La educación superior nos puede ayudar a aprender cómo hacerlo: (a) optimizando las estructuras institucionales, (b) rediseñando su misión, objetivos, valores, gobernanza, financiamiento y (c) innovando a fin de satisfacer los compromisos sociales. De allí, se derivan cuatro desafíos: 1.- transformarse en motores de promoción y movilidad social; 2.- responder a las nuevas exigencias que la globalización y las sociedades del conocimiento imponen a los países en vías de desarrollo, para generar una capacidad propia de producción científica y tecnológica; 3.- conectarse e integrarse mejor con sus propias sociedades; y 4.- consolidar el desarrollo de una ciudadanía responsable con los compromisos sociales, con la sostenibilidad y con la construcción de mejores sociedades, más justas, equitativas, pacíficas, fundamentadas en los valores humanos y de convivencia democrática.

1. Los resultados de los debates y discusiones sobre la autonomía universitaria tienen que impactar en su estatuto legal y desarrollarse en el marco de la Constitución de cada uno de los países de la región.
2. Los procesos de diseño, formulación y aplicación de las políticas públicas de educación superior deben garantizar la autonomía académica y financiera y, consecuentemente, la sostenibilidad de las instituciones de educación superior.
3. La inversión en investigación y desarrollo incide en la capacidad productiva de los países, razón por la cual los Estados serán responsables de su incremento según criterios e indicadores adecuados.
4. El diseño de las políticas públicas de financiamiento de la educación superior se fundamenta en la sostenibilidad como cultura organizacional. En tal contexto, las instituciones de educación superior diseñarán estrategias de divulgación para que la sociedad conozca y asuma los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Educativa 2030 y trabaje en su consecución.
5. Los criterios de desarrollo sostenible en relación con la educación superior podrán:
 - a) aplicarse en sus planes, programas, políticas, estrategias y acciones, especialmente en la orientación de la inversión para esos propósitos; y,
 - b) establecer programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación y propuestas de transformación, conjuntamente con entidades públicas y organizaciones productivas sociales.
6. El acceso, la inclusión y la equidad, la calidad y la pertinencia son, en conjunto, objetivo estratégico regional de un sistema de educación superior a distancia y virtual debidamente regulado, con diseños curriculares renovados y flexibles, que aprovecha la tecnología y los recursos educativos de libre acceso.



7. La educación terciaria es esencial para la inserción de las personas en el mercado del trabajo y la erradicación de la pobreza. Por lo tanto, es imprescindible priorizar la inversión en este nivel y establecer vinculaciones y compatibilidades entre el sector productivo y las instituciones de educación superior. Así será posible romper la brecha entre el talento humano requerido por el sector productivo y el que está egresando de las instituciones de educación superior (IES).
8. Las IES serán responsables de egresar profesionales con competencias técnicas, profesionales y culturales para enfrentar los desafíos de la sociedad y contribuir a la consecución de los ODS, así como para acceder al empleo decente y activar el emprendimiento.
9. El acceso, la inclusión y la equidad, la calidad y la pertinencia son, en conjunto, objetivo estratégico regional de un sistema de educación superior de gestión privada por lo que esta última está en condiciones no sólo de invertir recursos financieros adicionales, sino también de introducir enfoques, experiencias e innovaciones. De igual forma, este sistema de gestión debe continuar apuntando, a la par de las instituciones públicas, al logro de este objetivo estratégico.
10. La educación privada con fines de lucro no pertenece al ámbito del principio del “trato nacional” en tanto los subsidios públicos y otras herramientas de política pública que se le conceden a una institución nacional deberían concederse a otras, independientemente de su carácter público o privado, nacional o extranjero.
11. La Conferencia Regional de Educación Superior 2018 ratifica su rechazo a la concepción de la educación superior como un servicio. La educación superior no forma parte, ni actualmente ni en el futuro, de las negociaciones propias de foros comerciales internacionales.

A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Hacia un nuevo Manifiesto de la Educación Superior Latinoamericana

Para dar continuidad al espíritu y principios de la reforma de 1918, se reafirman los acuerdos alcanzados Declaraciones de la Reunión de la Habana, Cuba de 1996, de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe de 2008 y de la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998. La educación superior es un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado. El conocimiento debe ser considerado un bien público social. El Estado debe regular el sistema de educación superior y debe prohibir a las instituciones de educación superior con fines de lucro.



La actual coyuntura política en la región, que se expresa, en algunos países, en la persecución de autoridades universitarias, en la violencia contra los estudiantes, en ajustes económicos y en la violación de la autonomía universitaria significa un retroceso histórico. Estas violaciones deben ser enfáticamente condenadas.

Las instituciones de la educación superior de América Latina y el Caribe deben defender los derechos políticos y sociales, y plantear críticamente su inserción frente al modelo de desarrollo neoliberal. Podrá de esta manera contribuir, con responsabilidad y compromiso social, a nuevas propuestas que recreen las tradiciones de autonomía, transformación social, antiautoritarismo, democracia, libertad de cátedra y, fundamentalmente, la incidencia política fundada en el conocimiento y la razón.

Se destaca el compromiso social con la igualdad, la democracia plena, el desarrollo económico, la creación y el acceso a la cultura y al arte, y la defensa de los derechos humanos. Este compromiso implica que la educación superior sea parte de la sociedad y se democratice en todos sus ámbitos.

La autonomía es una condición imprescindible para que las instituciones ejerzan un papel crítico y propositivo de cara a la sociedad. Esta se asienta en los derechos de acceso a la toma de decisiones, de representación y de plena participación democrática que se expresa en el cogobierno, así como en la transparencia y la rendición de cuentas.

Es imprescindible alcanzar la plena equidad de género, erradicar el acoso y otras formas de violencia de género, así como establecer programas y políticas afirmativas para incrementar la presencia de académicas en los posgrados y en ámbitos de dirección universitaria.

Proponemos garantizar cobertura universal para todos los jóvenes entre 18 y 23 años. Deben revisarse los procedimientos de acceso y establecer políticas de acción afirmativa basadas en género, etnia, clase y discapacidad, para ampliar la inclusión social.

La educación superior pública debe ser gratuita, y para ser completa, debe ir acompañada de sistemas de becas para estudiantes de bajos recursos y provenientes de poblaciones marginadas.

1. Reafirmación del papel fundamental de las universidades públicas de América Latina y el Caribe en la sociedad.

Ratificamos el papel central de las universidades públicas de la región ya que constituyen espacios privilegiados para la construcción de puentes entre tendencias globales e identidades nacionales son las principales instituciones en el ámbito público para la comprensión reflexiva y la crítica –sustentada en el conocimiento– sobre la sociedad contemporánea e instituciones fundamentales para la producción de conocimientos, atendiendo a un conjunto muy amplio de preocupaciones sociales, demandas y problemas en diversos ámbitos.



2. Es necesario reafirmar la identidad de la Universidad de ALC, frente al modelo estandarizado hegemónico de universidad elitista. Para ello se debe incluir en las definiciones y políticas de la universidad pública latinoamericana la cuestión de la indisociabilidad entre la enseñanza, la investigación y la extensión, de la identidad y tradición de su historia con su misión y propósitos. Esto posibilita que ella retome un papel relevante en la sociedad en cuanto al aporte para el desarrollo creativo, productivo y cultural.
3. Confirmamos el compromiso de las Universidades de ALC con la transformación y el avance democrático de nuestras sociedades. Las Universidades deben participar en las discusiones nacionales e internacionales sobre el conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico, así como con la propiedad intelectual (patentes y aplicación de conocimientos en productos) y el derecho a los conocimientos tradicionales.
4. En el presente es una obligación ineludible participar en la discusión sobre la filosofía y orientación de la educación en nuestros países; producir material didáctico y promover innovaciones pedagógicas; contribuir a la formación de maestros y presentar alternativas de políticas públicas en este sector.
5. La crisis de las instituciones políticas y de las bases republicanas que viven los países de la región plantean nuevas responsabilidades políticas de cara a la sociedad. En ese sentido se reafirma el ideario de la Reforma universitaria de Córdoba cuyo modelo de universidad plantea un proyecto social, educativo y esencialmente político con una especial perspectiva latinoamericanista. Además, se debe reafirmar el firme e ineludible compromiso de la Universidad con los valores republicanos, la democracia social y los derechos humanos.
6. La autonomía que se reivindica es la que permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan cortapisas y límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas, el mercado o intereses particulares. La defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la universidad.
7. Es necesario incluir como meta estratégica en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo una cobertura universal en educación superior. Para ello se requiere una vigorosa política de ampliación de la propuesta pública de educación superior gratuita. La misma debe ir en consonancia con una revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, estableciendo una nueva generación de políticas de acción afirmativa –con base en género, etnia, clase y capacidades diferentes– para ampliar la inclusión social y la diversidad en las políticas de ingreso, permanencia, egreso y titulación.
8. Expresamos nuestro convencimiento de que la educación superior pública en América Latina debe ser gratuita y un deber del Estado teniendo este como responsabilidad indelegable, garantizar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. La gratuidad, para ser completa, debe ir

acompañada de sistemas sólidos de asistencia estudiantil para estudiantes de escasos recursos económicos y provenientes de poblaciones tradicionalmente marginadas.

9. Resulta fundamental en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados para el 2030 que se reviertan las tendencias a la mercantilización de la educación. Los ODS y en particular lo que concierne a la educación superior requieren del compromiso público y de un nuevo pacto que incluya como política estatal un financiamiento adecuado de las instituciones de educación superior públicas.
10. Resulta necesaria la regulación de la educación superior privada para garantizar la calidad de la educación y los derechos de quienes optan por la misma. Hay una diferencia importante en las instituciones de educación superior privadas entre las que han surgido, sobre todo en los últimos años, con fines de lucro de otras que están insertas en los sistemas educativos. Para coadyuvar con la calidad de la educación y con el ODS correspondiente, planteamos la demanda de prohibir las instituciones de educación superior con fines de lucro en todos los países de la región.
11. Existe un retraso en ALC en la creación de conocimiento asociada a la investigación fundamental y en mayor medida en su aplicación vinculada a procesos de innovación en ámbitos sociales y productivos. Resulta importante plantearse como objetivo para la próxima década un programa de desarrollo estratégico científico y tecnológico acordado regionalmente, promoviendo la investigación orientada a contextos de aplicación relacionados a problemáticas sociales, culturales y productivas prioritarias en la región. En consonancia con ello se debe propiciar un mayor financiamiento público para el desarrollo científico y tecnológico en cada uno de los países de ALC.
12. Un aspecto fundamental en el proceso de regionalización/internacionalización de la Universidad de ALC es que la misma se ubique como uno de los pilares y actores centrales en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En materia de regionalización-internacionalización se plantea impulsar y fortalecer el aporte que las universidades de la región han dado al proceso de integración regional haciendo confluir sus esfuerzos (nacionales y regionales) para la concreción del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior – ENLACES, como espacio representativo de la Educación superior de ALyC. La CRES 2018 debe acordar objetivos y metas para su desarrollo en los próximos años.
13. Este aspecto aparece como central e insoslayable para ser incorporado en este eje 7 de la CRES 2018. Tiene que ver esencialmente con el espíritu de los jóvenes reformista del '18, que, desde su mirada crítica y disconforme, expresaban una universidad con capacidad de pensarse y repensarse a sí misma. En los tiempos actuales, este extraordinario ejercicio de imaginar un futuro posible puedes ser alcanzado a partir del grado de acuerdo a nivel regional que hoy se expresa en la CRES 2018.
14. Se propone impulsar la creación de un Programa de estudios y prospectivas de la educación superior de ALC.



CONSIDERACIONES FINALES

En el marco de los cien años de la Reforma de Córdoba, la CRES 2018 ratifica estos principios declarativos: la educación superior como un bien público social – estratégico, un deber del Estado, un espacio del conocimiento, derecho humano y universal; su ejercicio profundiza la democracia y posibilita la superación de las inequidades. En ella se despliega el compromiso con el ser humano, con su contexto, con el desarrollo en valores e ideales que inspiren una cultura de paz, con respeto por los derechos humanos en un ambiente de garantías democráticas en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible.

El principio declarativo sobre la educación superior se conjuga en el marco jurídico y los textos normativos de la UNESCO, se inscribe en un entramado conceptual humanista, con un enfoque de desarrollo humano y de factor de movilidad social, transformador de la vida de los hombres y de su realidad. Bajo la consideración y compromiso militante, se exalta el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad, el aprendizaje y la pertinencia. Los compromisos, desafíos y retos que debemos enfrentar son muchos y responden al firme propósito de consolidación de nuestros sistemas e instituciones.



CARTA DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Córdoba, Argentina, 14 de junio de 2018

Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN -, Colombia; Universidad Indígena Intercultural Comunitaria Productiva Guarani y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” y Universidad Indígena Intercultural Productiva Quechua “Casimiro Huanca” de Bolivia; Universidad intercultural Amawtay Wasi, Ecuador; Consejo QOMPI y Centro Educativo Integral QATAXAC NAM QOMPI – IES – CES- BI Pampa del Indio Chaco, Instituto de Educación Superior Intercultural “Gloria Pérez”, Argentina; Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional de Panamá, Panamá; Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense – URACCAN- de Nicaragua; Universidad Ixil y la Universidad Maya Kakchikel de Guatemala, y la Red de universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala “RUIICAY”.

A la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018:

Reunidos en el marco de la CRES 2018 en Córdoba, Argentina, los días 11, 12 y 13 de junio del año 2018, las Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias participantes en la Conferencia “Interculturalidad e internacionalización desde los pueblos de América Latina y el Caribe” expuesta por la hermana Doctora Alta Hooker Rectora de la URACCAN y Coordinadora de la RUIICAY, y en el Simposio Eje Temático: “Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina” decidimos abrir un espacio de intercambio de experiencias de nuestras Universidades e instituciones de educación indígena y afrodescendiente, cuyos resultados exponemos a continuación:

1. Nuestro reconocimiento a los organizadores de la CRES 2018 por haber previsto el abordaje de los temas de interculturalidad y diversidad cultural en la educación superior en América Latina y el Caribe, lo que nos ha permitido exponer nuestra palabra y nuestras propias experiencias de educación universitaria que queremos aportar a la CRES 2018.

2. Desde nuestros Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, la interculturalidad, entendida como una forma de promover la diversidad cultural, los valores de nuestras culturas milenarias, permitió dar importantes pasos en las universidades convencionales durante las últimas décadas, por ejemplo: programas específicos con contenidos indígenas, formación de profesionales interculturales, acciones positivas a favor de jóvenes, entre otros. Sin embargo, debemos afirmar que persiste la deuda histórica de los Estados y de las IES hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes manifiesta en el no reconocimiento y no respeto a nuestras instituciones educativas y culturales, la academia que nos convierte en objetos de investigación y no protagonistas, la pérdida cultural indígena de quienes acuden a las universidades, hasta la violencia epistémica o la desvalorización de nuestros conceptos y nuestras pedagogías indígenas, entre otras manifestaciones.
3. En el marco de la CRES 2018, queremos compartir a los Estados y a las IES que, en las últimas décadas, nuestras abuelas y abuelos, sabias y sabios, y nuestras comunidades y pueblos indígenas en un esfuerzo compartido con sus organizaciones sociales y autoridades comunitarias, como sujetos de derecho hemos iniciado la reconstrucción y recreación de nuestras instituciones educativas, sociales, culturales y de espiritualidad indígena y afrodescendiente. Nuestras universidades e instituciones educativas con sus currículos y pedagogías, identidad y simbologías propias, nacen interculturales reafirmando su contenido y carácter indígena y afrodescendientes al mismo tiempo que buscan el acceso a las otras culturas, sistemas educativos, idiomas, a los otros saberes, ciencias y culturas, hacia una formación pluricultural e intercultural, son procesos educativos de creciente pluriversidad.
4. Nuestras universidades e instituciones educativas se han creado en el marco constitucional de nuestros países, aplicando los convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración del Decenio de los Pueblos Afrodescendientes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, y ejerciendo el derecho universal de los pueblos de decidir su destino y de sus futuras generaciones. Sin embargo, solo algunos Estados reconocen la institucionalidad y dan apoyo financiero a nuestras Universidades e instituciones educativas, en otros casos se está en proceso, y en numerosos casos los Estados y las IES no reconocen, no respetan. De todas formas, existen, se crean y crecen numerosas instituciones de educación propia de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se convierten en parte de la riqueza cultural y educativa de nuestros países.
5. Estamos convencidos que los Estados y las IES en el marco de la interculturalidad caminan hacia el dialogo de saberes, pueblos y culturas, proceso que pasa por el reconocimiento y respeto de las universidades e instituciones de edu-

cación indígenas y afrodescendientes, de sus sistemas jurídicos, de salud y de producción alimentaria, de sus idiomas propios, a la implementación de esfuerzos conjuntos en la formación de profesionales interculturales que reafirmen y refuercen su identidad cultural indígena y afrodescendiente al mismo tiempo que son profesionales egresados de las universidades convencionales, y otras acciones que deben buscar la eliminación del racismo hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes y toda forma de desigualdad social que afecta a nuestras sociedades.

6. Abogamos por una cultura de tolerancia, solidaridad, hermandad entre nuestros pueblos y comunidades y de armonía con la madre tierra, nuestros territorios y sus bienes naturales que son parte de los contenidos de las nuestras universidades e instituciones educativas cuyo objetivo es educar para la vida y para el buen vivir de nuestros pueblos, recuperar la solidaridad desde nuestras cosmovisiones y pedagogías, sueños y esperanzas, y formas de evaluación y acreditación, en ejercicio de nuestro derecho a la educación como un bien público y social, un derecho humano universal y una obligación de los Estados y de las IES a quienes también asiste una responsabilidad institucional de apoyar y acompañar para armonizar de manera conjunta y respetuosa, ambos procesos educativos y culturales.

Al cerrar nuestro mensaje a la CRES 2018, valoramos y apoyamos los esfuerzos de Comunidad Indígena QOM y demás Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Argentina y de toda nuestra América que están buscando reconstituir sus universidades o distintas formas de institucionalidad educativa propia, reiteramos nuestro reconocimiento a la oportunidad de haber expuesto nuestra palabra y experiencia de educación propia, y expresamos nuestro compromiso de seguir participando con acciones y propuestas en el dialogo entre saberes que propicia la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018.

Córdoba, Argentina, 14 de junio del 2018.

Presentada en la asamblea de la III Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, a los 14 días del mes de junio de 2018.



CRES 2018 PRESENTATION

The Regional Conferences on Higher Education (CRES in Spanish) have been organized by the UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean (UNESCO-IESALC), with an approximate periodicity of ten years. The first Conference took place in Havana, Cuba, in 1996. The second one was held in Cartagena de Indias, in 2008. On June 15th, 2016, the Memorandum de Entendimiento (Memorandum of Understanding) was signed between UNESCO-IESALC, the Universidad Nacional de Cordoba (UNC), the National Interuniversity Council (CIN) and the Secretariat of University Policies (SPU) of the Ministry of Education of Argentina; this gave forth to the celebration of the Third Regional Conference from June 11th to 14th, 2018 in the framework of the centenary of the University Reform of 1918.

The goals of the Regional Conference on Higher Education (CRES 2018) reflected a constant process of study and analysis on higher education in Latin America and the Caribbean. Thus, the main goals of the Cordoba Conference were (a) to contribute to the consolidation of higher education systems in the region and (b) to generate research and innovation spaces for human development, democratic coexistence and citizenship, based on the principles of tolerance, solidarity and social commitment. The CRES 2018 Declaration, as a guiding instrument for the strategic guidelines of the sector, and the Action Plan with its road map, derived from the Regional Conference. The Conference of Cordoba was based on seven thematic axes, in each of which researchers from throughout Latin America and the Caribbean participated.

During the stages prior to the Cordoba Conference, regional preparatory meetings, virtual forums, meetings, seminars, events and a wide range of consultation and analysis mechanisms were held to include all possible views and accommodate the largest number of participations from interested stakeholders, institutions and governments. Approximately 12 thousand people participated in the Conference, face-to-face and in virtual fashion.

The general program was organized in conferences, forums, symposia on the Conference's thematic axes and discussion tables. CRES 2018 had a program of complementary activities, including book presentations and meetings of associations, authorities, university and thematic networks. In the closing ceremony,

the director of UNESCO-IESALC, Pedro Henríquez Guajardo; the rector of the Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, and the general coordinator of the CRES 2018, Francisco Tamarit, read the Declaration's preface. After the culmination of the CRES 2018, began the process of formulating the Action Plan 2018-2028 with a multidisciplinary team that has systematized results from the Declaration, proposal documents and other official documents. The Action Plan implies the prospective opening of the 2018-2028 decade within the framework of the Sustainable Development Goals (SDG) and the UNESCO Global Education 2030 Agenda. It will be adopted during the IX Meeting of Networks and Councils of Rectors of Latin America and the Caribbean which will be organized by UNESCO-IESALC in March 2019.

The CRES 2018 Action Plan is the result of a rigorous managerial, academic and technical process that will constitute the regional contribution for the next World Conference on Higher Education at UNESCO's headquarters.

This document presents the CRES 2018 Declaration, the summaries of the thematic axes and the Letter from the Indigenous Peoples' Universities and Institutions of Education, read during the closing ceremony of the Regional Conference.

Pedro Henríquez Guajardo
Director of UNESCO-IESALC



CRES 2018 DECLARATION

To all men and women of Latin America and the Caribbean:

The sweeping changes, affecting the region and the world in crisis, call us to fight for a radical change; for a more democratic, more equal, more sustainable, and fairer society.

A century ago, the students of the Cordoba Reform proclaimed that "The griefs that remain are the liberties we still lack". This message cannot be forgotten, because the grief is still here, and it takes many forms; for we still see poverty, inequality, injustice, and social violence in the region.

Just as a century ago, the university today is in favor of science with a humanistic perspective, and in favor of a technology that is fair, and provides for the common good and the rights of all men and women.

The Third Regional Conference on Higher Education for Latin America and the Caribbean endorses the agreements reached in the Declarations adopted in the Regional Conference held in La Habana (Cuba) in 1996, the World Conference on Higher Education in Paris (France) in 1998, and the Regional Conference on Higher Education held in Cartagena de Indias (Colombia) in 2008 while reasserting the principle that considers that Higher Education is a common public good, a universal human right which should be ensured by all States. These principles are based on the deep conviction that the access to, and use and democratization of knowledge is a collective, strategic social asset essential to guarantee the basic human rights and the wellbeing of our peoples, the construction of full citizenship, the social emancipation, and the regional integration with solidarity of Latin America and the Caribbean.

We hereby reassert the autonomy that allows higher education institutions to play a critical and proactive role in society without the constraints imposed by the governments in office, religious beliefs, the market or special interests. The defense of higher education institutions' autonomy is an una-

voidable contemporary responsibility for the Latin America and Caribbean region, and it entails, at the same time, the defense of the higher education' social commitment.

It is important to think that education, science, technology and arts will solve the current human pressing issues, but this is not enough. They should become the means to freedom and equality, without any distinction based on social status, gender, ethnicity, religion or age. If the dialogue of knowledges is to be universal, it should be many-sided and based on an equal footing; only then will the dialogue among cultures be enabled.

The economic, technological and social differences existing between the North and the South, and the internal divide among States are becoming more exacerbated, rather than disappearing. The international system promotes the free exchange of goods, while applying exclusionary migration regulations. The high rate of emigration of the population of Latin America and the Caribbean shows the lack of opportunities and inequalities affecting, above all, the young.

Gender inequality manifests itself in the pay gap, in the discrimination in the workplace and in the difference in the access to decision-making positions in the public or private sector. The worst indicators of poverty and social exclusion are seen among Indigenous and Afro-descendant women.

Science, arts and technology should become the pillars for cooperation tending towards an equal development of the region with solidarity, based on processes that lead to the consolidation of an independent and politically sovereign block.

The weak regulation of foreign supply has intensified the transnationalization processes and the market-oriented view of higher education; thus, precluding, or in many cases, restraining the actual social right to education. This trend has to be reverted and we urge all the States of Latin America and the Caribbean to establish strict regulatory systems for higher education as well as for other educational levels.

Education is not a good to be traded. That is why we ask our States not to sign bilateral or multilateral free trade treaties which consider education as a for-profit service, or that foster the commodification of any level of education. We also request them to increase the resources allotted to education, science and technology.

States have to assume the inalienable commitment to regulate and evaluate public and private institutions and degrees, in all their modalities, to ensure



universal access to higher education as well as retention and graduation, while offering quality training that promotes inclusion and local and regional relevance.

Similarly to what happened in 1918, “rebellion has broken out” in Latin America and the Caribbean as well as in a world where the international financial system is concentrated in powerful minorities that push large majorities into the margins of exclusion, social vulnerability and job insecurity.

In spite of all the great achievements attained in the development of knowledge, research, and academic and popular knowledge and wisdom, a significant sector of the population, both in Latin America and the Caribbean and in the world, does not have access to basic social rights, to employment, health, drinking water or education.

In this 20th Century, millions of children, youngsters, adults and the elderly are excluded from current social, cultural, economic and technological progress. Furthermore, regional and global inequality is so strong that in many situations and contexts, there are communities which have no access to higher education, because it continues to be a privilege and not a right as the young students of 1918 longed for.

In the Centennial of the Reform, we cannot remain oblivious to human suffering or our historical mandate. We cannot continue to be indifferent to the collective future, to the fight for the heroic truth, and to the transcendental desire for human freedom. Higher Education should be forged by the local, state, national and international leadership, as they are fully represented here. If we bear this in mind, it will be possible to begin a new and historical transformation of higher education with social commitment and responsibility to guarantee the full exercise of the right to free, public higher education, with wide access.

In agreement with the fourth Sustainable Development Goal of the Agenda 2030 adopted by UNESCO, we urge the States to promote a strong policy to widen the provision of higher education, to carry out an in-depth review of the procedures for access to the system, and to develop affirmative action policies making no distinctions based on gender, ethnicity, social class and/or disability; to ensure universal access to, retention and graduation from higher education.

In this context, higher education institutions should accept all colors, and recognize the interculturality of our countries and communities so that higher education becomes a means for equal access and social promotion, and not a sphere where privileges continue to exist. We cannot remain silent in the face of the deprivation and pain suffered by men and women, as stated relentlessly by Mario Benedetti, “there is nothing more deafening than silence”.

A century ago, the students of the Cordoba Reform strongly denounced that in Cordoba and in an unfair and tyrannical world, the universities had become “*the faithful reflection*



of our decadent societies, which continue to exhibit a dismal parade of senile immobility". Many years have gone by, and this message for the future is challenging us and piercing us like an ethical arrow that questions our practices. How do we contribute to the creation of a fair order, to social equality, to harmony among nations and to human emancipation?; how do we contribute to the overcoming of the scientific and technological gap of our production structures?; what is our contribution to the forging of the identity of the peoples, human integrity, gender equality and free discussion of ideas so as to guarantee the strength of our local, national and regional cultures?

That is why we truly believe that our institutions should be actively engaged in the much-needed social, cultural, political, artistic, economic and technological transformation which is essential today. We have to educate the leaders of tomorrow on the value of social awareness and the desire to promote Latin American bonds. Let us forge working communities willing to learn and build a critical knowledge where the dialogue among students and professors is the rule. Let us build democratic learning environments where the vital manifestation of the personality develops, and where artistic, scientific and technological creations are expressed without any boundaries.

The higher education to be created should fulfill its cultural and ethical calling with full autonomy and freedom; thus, contributing to practical, political definitions which shall influence the changes needed and desired by our communities. Higher education should be the emblematic institution symbol of the national critical awareness of our Latin American and Caribbean region.

Higher education institutions are called upon to fulfill a crucial role in the promotion and strengthening of the Latin American and Caribbean democracies, rejecting all dictatorships and any violation of public freedoms, human rights and all forms of authoritarianism in the region.

We feel our solidarity with all young people from Latin America, the Caribbean and the world, whose life we celebrate, and we also recognize in their fights and dreams, our own aspirations in favor of the social, political and cultural transformation.

The task that falls upon us is not simple, but great is the cause that is lit by the brightness of its truth. It is, as anticipated in the Liminal Manifesto, a desire to *"become a glorious omen or it may have the virtue of a call to the supreme fight for liberty"*.

We call upon all men and women of Latin America and the Caribbean to look into the future and work relentlessly for a permanent educational reform, and for the rebirth of the culture and the life of our societies and peoples.



THEMATIC AXES

Higher education as part of the education system in Latin America and the Caribbean

Higher education is today an aspiration of young people graduating from high schools and of many adults who did not use to have access to this educational level. The increasing demand for access to higher education requires the satisfaction of multiple needs, resulting in the diversification of the offer provided through different types of institutions, programs, teaching-learning modalities and training strategies. Today, when discussing higher education, we refer to a wide and diverse set which goes beyond our traditional conception, which used to identify higher education with universities.

In this context, the articulation of higher education with the other educational levels is essential. However, while higher education criticizes the education students received before having access to it, it does not assume the commitment it has, more specifically, in terms of the quality of teachers' training. This is a critical aspect which should be addressed, both by higher education institutions, as well as by public policies: it is necessary for the institutions to give priority to quality training, centered on the current needs of children and adolescents. Moreover, public authorities should be actively involved in the design and implementation of policies that reassess the teaching profession, recognizing its central role, and adequately rewarding educational performance.

Furthermore, the issues related to quality should be addressed in a context of diversity. This requires the definition of quality with the participation of the main social actors, and the establishment of indicators adequate to the training objectives of the institutions, which should incorporate inclusion, diversity and relevance as core values. It is necessary to design policies and mechanisms which are not limited to assessing, but which are determined to promoting quality and support



to the institutions so that they, while in exercise of a responsible autonomy, assume the commitment to steadily advance in the capacity to meet the needs of the students and the social environment surrounding them.

If higher education is to contribute more and more to the wellbeing of the region, it is necessary to promote the articulation of higher education institutions with the different social sectors, and to ensure lifelong learning opportunities for all.

1. Governments and higher education institutions should endeavor to implement agreements, programs and institutional arrangements that recognize knowledge, skills and prior studies, as well as the respective credentials and certifications, acquired in the same or other systems of higher education, in secondary education or in the workplace, fostering initiatives that promote lifelong learning, surpassing the terminal curricula.
2. It is necessary to address the real needs of students from the beginning, based on the expectations demanded by higher education institutions. Processes that facilitate the transition between secondary and higher education should be generated, with vocational, support and leveling programs, through the re-design of curricula.
3. The flexibility of the curricula is essential. It is necessary to review the curricular structures in order to arrange them by competencies, reduce the content in undergraduate studies and expand opportunities in postgraduate studies. The result of this process should produce open educational trajectories (such as the accreditation of modules and not of subjects), and be oriented towards the recognition of verifiable qualifications.
4. States and higher education institutions must develop connective strategies and collaborative programs, at the undergraduate and postgraduate levels, guaranteeing the resources for innovation, science, technology and research, and thus avoiding the dissociation between higher education and the productive environment.
5. Accreditation should be based on simultaneous evaluations in those careers within the same area of knowledge, integrating the institutional (financial, administrative and managerial) and academic (professional training) aspects in order to perform comparative analysis. Also, regulatory and evaluation mechanisms of the accreditation agencies, should be established in order to ensure international criteria of credibility and effectiveness.



Higher education, cultural diversity and interculturality in Latin America

The policies and institutions of higher education should proactively contribute to the struggle against all mechanisms generating racism, sexism, xenophobia, and all other forms of intolerance and discrimination. It is essential to guarantee the rights of all sectors of population which may be discriminated due to their race, ethnicity, gender, socioeconomic standing, disability, sexual orientation, religion, nationality or forced displacement. Financial resources and research, teaching, and outreach efforts should be allotted to these purposes.

It is necessary to promote cultural diversity and interculturalism under conditions of mutual respect and equality. The challenge is not just for higher education institutions to include women, people with disabilities, members of Indigenous and Afro-descendant populations and individuals of groups historically discriminated, but to transform the institutions so that they become socially and culturally relevant. These changes should ensure that the worldviews, values, knowledge, wisdoms, linguistic systems, learning methods, and means of production of knowledge of those social groups and peoples are incorporated into higher education institutions.

The epistemology, learning methods, and institutional designs characteristic of Indigenous and Afro-descendant peoples, farming communities, and other sociocultural distinct communities have to be recognized and valued. All these should be guaranteed by adequate quality assurance policies and mechanisms; and to this end, specific indicators should be used. The free and informed participation of representatives of those groups should be fostered.

Education is not just a human right but a right of all the peoples. The Latin American and Caribbean States and societies have a significant historical debt with Indigenous and Afro-descendant peoples. Although their rights are recognized in several international documents and in most of the national constitutions, there is still a deficit in the effective enjoyment of these rights, even in higher education. The institutions of higher education should guarantee the effective enjoyment of these rights and should educate the population in general, and in particular, their communities against racism and all forms of discrimination and related intolerance.

It is essential to promote and facilitate the learning of the Indigenous and Afro-descendant languages and their effective use in teaching, research and outreach activities. The training of intercultural bilingual teachers for all levels of the educational systems is a priority for higher education.



1. Higher education institutions (HEI) have a legal, ethical, social and political obligation to apply the rights of Indigenous and Afro-descendant peoples effectively.
2. Institutions of higher education have an obligation to educate respecting and applying rights against racism and all forms of racial discrimination and related forms of intolerance towards the population in general, and particularly, towards its own teachers, researchers, officials and managers, as well as to those who provide professional, scientific and humanistic training.
3. The public and institutional policies of higher education must proactively contribute to dismantle all the mechanisms that generate racism, discrimination and all forms of intolerance that still exist in Latin American societies.
4. It is imperative for public and institutional policies to guarantee not only the Indigenous and Afro-descendant peoples' rights, but also the rights of all the groups that are frequently discriminated, in terms of gender, race, ethnicity, religion, age, socio-economic situation, sexual orientation, disability/special abilities and situations of forced displacement. It is unavoidable for higher education institutions to make all the efforts in research, teaching and extension programs required to meet these ends.
5. HEI should promote cultural diversity and inter-culturality in equitable and mutually respectful conditions. The challenge is not only to include Indigenous, African descendant and other culturally differentiated people in the institutions such as they exist now, but to transform these to make them more relevant for cultural diversity. It is imperative to incorporate the Indigenous and Afro-descendant peoples' knowledge, traditional lore, values, linguistic systems, worldviews, forms of learning, and ways of producing knowledge, and for this to be done with the informed and active participation of these peoples' representatives.
6. Public and institutional policies on higher education should promote and facilitate the learning of native American languages.
7. Higher education public policies and institutional accreditation mechanisms must recognize and value the experiences of Indigenous and Afro-descendant peoples' educational institutions, their contributions to the resolution of important social problems and their educational innovations. To this end, they must incorporate specific indicators in their definition and ensure the informed and opportune inclusion of these peoples' professionals and representatives in the evaluation and accreditation processes.



Higher education, internationalization and regional integration in Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean, “ensuring the right to equitable and inclusive quality education” (CEPAL, 2016) is one of the cornerstones supporting the necessary social and economic change. Its achievement is related to the development of competencies allowing the region, its countries and its citizens to act in a relevant manner in complex scenarios, and to be inserted effectively in the knowledge-based world dynamics. This requires changes in the educational systems and their institutions, which should consider cooperation, exchange of knowledge and transference of resources among regions, countries and institutions with solidarity. In the region, internationalization should foster interinstitutional cooperation based on solidarity among equals, with emphasis in South-South cooperation and regional integration. It should promote an intercultural dialogue, respecting the idiosyncrasy and identity of the participating countries, fostering the organization of interuniversity networks, and strengthening the national capacity by means of interinstitutional collaboration and interaction among academic peers at regional and international spheres. This will foster the flow and ownership of knowledge as a strategic social good, favoring the sustainable development of the region and its countries.

In this context, internationalization is a key tool, which is essential to transform higher education, to strengthen the communities, and to promote quality and ownership of teaching, research, and outreach. This favors the training of citizens and professionals, while being respectful of cultural diversity, and committed to intercultural understanding, and a culture of peace, with the capacity to live together and work in the global and local community. The antithesis would be the conception of a market-oriented internationalization which favors the hegemonic and denationalizing interests of globalization.

Compliance with these objectives demands the use of systemic, comprehensive, global strategies cutting across all institutional development policies. Likewise, it is essential to have public policies supporting the internationalization process by means of the establishment of organizational frameworks facilitating regional academic integration, student and teacher mobility, the recognition of international training, the international dimension of academic programs and international cooperation in research, among others.

1. We recognize a humanistic and supportive internationalization that contributes to a greater and better understanding and cooperation between cultures and nations, based on an inter-institutional collaboration based on solidarity and mutual respect.

2. The links between universities and other higher education institutions strengthen, consolidate and nurture the creation of the national capacities of the countries involved. This guarantees the diversity of academic sources in the fields of research and knowledge production, on a regional and global scale.
3. Higher education institutions contribute to the consensual design of projects of nation, with their own educational projects as starting points, committing all their teaching, research and service activities to the process.
4. Internationalization will become a lever for the transformation of the tertiary education sector with systemic, all-embracing, comprehensive and transversal strategies permeating all the institutional development policies with curricular contents and structures.
5. Internationalization is a strategic medium for the production of knowledge with a perspective based on international collaboration. It is a process for the innovation and improvement of the quality and relevance of tertiary education in relation to the development of global and intercultural competences in students.
6. Public and institutional policies are determinant to consolidate the institutionalization of the international dimension of universities and of the three levels of the educational process: the micro (teaching-learning process in the classroom), the medium (structure and curricular content), and the macro (design of institutional policies on teaching, research and dissemination).
7. The international dimension is an intrinsic component of national scientific policies and of the scientific and research development instruments, with collaborative schemes towards regional integration, through:
 - a) the promotion and funding of the internationalization of research,
 - b) the increase and consolidation of the importance of international relationships between researchers,
 - c) the introduction of the international dimension in graduate programs for the training of researchers,
 - d) the improvement of the quality, relevance, productivity and visibility of research.
8. The internationalization of higher education will be consolidated through a regional scientific development policy and strategy, which will coordinate efforts, strengthen resources and multiply programs.
9. The governments of the region need to boost, deepen and consolidate the political will towards regional integration. In relation to higher education, a per-



manent articulation between public and institutional policies is imperative in order to build a regional academic community that respects diversity and simultaneously recognizes the validity of other systems and institutions.

10. In regional higher education it is essential to establish policies, coordinating structures, regional programs and the corresponding financial structure to strengthen and extend the integration efforts, the cooperative work and the programs of the different councils and associations of national, regional and international universities, international organizations, and HEL.
11. It is imperative to increase intraregional student mobility through inclusive initiatives and financing schemes that reach all the countries of the region, enabling the incorporation of disadvantaged students.
12. The pliability of the programs and curricula, their recognition and the coordination of the academic calendars, are basic conditions for the growth of mobility in regional higher education.

The role of higher education ahead of social challenges in Latin American and Caribbean

In view of the social challenges the region faces, education should provide a quality, universal service to the local community so as foster the human development of each environment, articulating tradition and state of the art innovation, promoting the diversity of competencies, skills and knowledge, merging specialized activity with daily life, popular wisdom and authentic ethical and esthetic intelligence in territorial harmony beyond any impact. It is essential to consider all people as unique and unfinished, as facilitators of change and agents of development by generating mechanisms for personal and social growth, and for the establishment of communities. In other words, higher education is the co-creator of knowledge and innovation, transforming them into knowledge that is embodied in the social practices, intellectual independence tools, social transformation and the construction of fairer, more equitable and supportive political structures, and above all, subsidiary to vernacular shared values. The region should promote science for all, critical citizenship and authentic, democratic and transparent governance for an effective construction of re-humanizing territorial relationships with all actors, improving communication among them, and making it possible to select the best contributions, thus generating relationships of co-responsibility which facilitate the wellbeing of the people.

1. The social responsibility of higher education institutions requires a new relationship with society and calls for an innovative transformation of higher education.
2. The limited approach of university social projection and extension, which make them visible as appendices of the central function of student education and knowledge production, should be qualitatively overcome, and the consistent social commitment of higher education to society's new realities should be identified.
3. The social commitment of higher education is based on the promotion of quality education for all. It implies promoting lifelong education, considering the student as a permanent ally of a process in which his/her knowledge and skills are at the service of social transformation for the good of all, especially the most vulnerable sectors.
4. Higher education must profoundly review its actions, in order to guide society and contribute to solve the chronic problems that afflict it. Higher education institutions must commit themselves to develop projects of inclusion, combat against poverty, innovate and promote social entrepreneurship for groups that face diverse situations of vulnerability, in favor of social justice. In this context, the relationship of higher education institutions with society, linked to the common good, highlights the need to operate with all the actors, may they be institutions or persons.
5. The social responsibility of higher education involves developing territorial and transformative commitments, from the perspective of an expanded academic community, in which the graduate is an ally and social transformer. In it, knowledge, training and action are interwoven to achieve a truly fair and sustainable development.
6. Training in higher education institutions is a permanent exercise of re-humanization.
7. Higher education institutions should link up with society to jointly create and design new scenarios for the democratic generation of knowledge, overcoming the disciplinary and academic vision of education.

Scientific and technological research and innovation as the engine of human, social and economic development for Latin America and the Caribbean

There will be no justice in the region if there is no freedom of thought and expression for the society as a whole, and there will be no freedom of thought if our countries do not generate knowledge relevant to their realities and social innovations to transform the primary production export matrix and secondary production import matrix, and to challenge the established order. Higher education institutions should claim sovereignty



to imagine, create, have access to, and apply the knowledge we need for the wellbeing of our societies, as part of their strategic role. One cannot think of a strategy to overcome unfair cognitive gaps without opening new epistemic roads. These new roads require breaking up with the (neo)colonial, (neo)dependent, anthropocentric, racist and patriarchal thought still prevalent in our societies. Only if learning what is known, and the generation of new knowledge are reconciled, if theory and practice go hand in hand, knowledge will support social justice. To understand the dimension of the change required by this epistemic matrix, we have to refer to the management of science and knowledge in the current system in a world favoring accumulation. This management is based on the construction of a hegemonic thought system, in which the exclusive role of science is the accumulation of capital through the production of proprietary technological innovation for commercial purposes. If we are to break up with this logic, we should consider knowledge as a universal human right and a collective right of the people, for it is a social and common public good promoting the sovereignty, wellbeing and emancipation of our societies and the construction of the Latin American and Caribbean integration. In other words, we should recognize that knowledge is the product of the intellectual and experimental heritage of humanity, being therefore a common good, and as a general rule, part of the public domain. This epistemic breakup implies the recognition of the strategic role played by the arts and culture in the production of knowledge with social commitment, and in the fight for cultural sovereignty and multi-cultural integration of the regions.

The political dispute over “which knowledge we want” becomes, at the same time, a political dispute over “which society”, and “which region we wish”. There will be no transformation of knowledge without a change in the historical power relationships in Latin America and the Caribbean. However, there will be no change in the historical power relationships in the region without a transformation of knowledge.

1. Knowledge is a universal human right and a collective right of the peoples, a public and social common asset for well-being, sovereignty and the emancipation of our societies, for the construction of Latin American and Caribbean citizenship.
2. The social function of science and knowledge is rethought in order to guarantee sustainability, peace, preserve cultural diversity, democracy, human coexistence and the reproduction of life.
3. Knowledge is a common resource and a public asset, therefore society has the right to demand the democratization of its access, and make the best use of it. Universal access to the system of science, technology and innovation and effective participation in the generation of knowledge of all actors in the system, guarantee gender and ethnic-racial equity, and equality of peoples and nationalities.

4. The promotion of technological development, responsible scientific research and the construction of inter-institutional knowledge networks, with trans-disciplinary and interdisciplinary approaches, guarantee quality and theoretical-methodological rigor.
5. The development of sociotechnical innovation ecosystems will sustain itself on the transfer of technology, technological disaggregation and the closing of cognitive gaps.
6. The human, social, economic and cultural development of LAC requires the recovery, re-evaluation and protection of the traditional and ancestral knowledge within the framework of respect for diversity, epistemic equity and the dialogue of knowledge.
7. The impulse towards a knowledge management oriented towards a sovereign, free and collaborative construction of science, to advance in the construction of regional knowledge in a context of greater integration of higher education actors.
8. The region demands new and adequate processes of evaluation, production and dissemination of knowledge, with standards of relevance.
9. Training processes at the graduate level aimed at scientific and technological research in the region will be enhanced with emphasis on social relevance.
10. The strategic use of the intellectual property system is directly linked to the recovery of the public and common sense of knowledge and technologies.

The strategic role of higher education in sustainable development of Latin America and the Caribbean

Sustainable development is a way of thinking that projects man towards a better relationship with the context, a categorical imperative that establishes the ethical value of coexistence in the world. It should respond to the social demands that require efficient and appropriate technical knowledge and its goal should be to overcome the conflicts and situations that affect the social sphere in order to reach common welfare. This premise establishes sustainable thinking as an integrated, complex, inter-disciplinary, universal and transforming social sciences' epistemic construction of high economic, social and environmental content in order to face the crisis of civilization. It views humankind's reality through multidimensional approaches to its problems, intervening in accordance



with risk management towards a better coexistence. Therefore, its principles are based on humanism, the public good, human rights and the platform to guarantee the realization of other rights.

Education is immersed in ethical assessments; therefore, society and education are articulated in an indissoluble construction of a social and complex way of thinking that is expressed through the sustainable development goals, and particularly the 4th goal of the UNESCO Education Agenda 2030. This objective “guarantees an inclusive and equitable quality education and promotes lifelong learning opportunities for all”. Consequently, the dynamics of social thought guide the discussion about higher education under the considerations of sustainable thinking with multidisciplinary approaches. In addition, the dimensions that define its pedagogical performance are those of gratuity, equity, quality, relevant and effective learning, accessibility, employability, gender equality, recognition of differences, and the development of theoretical and practical knowledge in order to promote the Sustainable Development Goals.

Society and higher education based on sustainable thinking must consider the difficulties, especially in the constantly changing current reality, imposed by degrees of uncertainty, ambiguity and complexity. It is time for academics, scientists and all members of society to dialogue; it is time to review the institutions’ structures, to innovate in their commitments and ways to achieve them. Higher education’s main goal is to form citizens with sustainable thinking to be the engine of the new society.

Under this interpretation, higher education as a social-strategic public asset, human and universal right, and State obligation in Latin America and the Caribbean, acquires new functions, different values, different challenges, unprecedented commitments and a strategic role in sustainable development. HEI must establish closer links with the contexts to which they belong, so they can be more relevant to and responsible for society. They must participate in social advancement, in the generation of wealth, in a culture of peace, of integration and social identification, in the struggle against hunger and poverty, and the growth of identities. Likewise, it must be proactive in the prevention of climate change and the energy crisis.

These broad and demanding challenges make HEI become strategic organizations for the development of countries, specifically in LAC. It will mainly be these institutions who will contribute to reduce and overcome the gaps that exist in the areas of science, technology, innovation and culture between our countries.

The idea of sustainability as a principle is that the knowledge generated in academic spaces can be introduced, used and adapted to social, economic and environmental goals that benefit all people; to build the mechanisms to live well and have better so-

cieties. Higher education can help us learn how to do it through the following actions: (a) optimizing institutional structures, (b) redesigning its mission, objectives, values, governance, and funding; and (c) innovating in order to meet social commitments. Four challenges emerge from this: 1. to become engines for social promotion and mobility; 2. to respond to the new challenges imposed by globalization and knowledge societies upon developing countries to generate their own capacity for scientific and technological production. 3. to connect and integrate themselves in a better way with their own societies; 4. to promote the development of a responsible citizenship committed to social issues, sustainability and the construction of better, more just, equitable and peaceful societies, based on human values and democratic coexistence.

1. The results of debates and discussions on university autonomy must have an impact on its legal status and should be developed within the framework of the Constitution of each of the region's countries.
2. The processes of design, formulation and application of higher education public policies must guarantee academic and financial autonomy and, consequently, the sustainability of higher education institutions.
3. Investment in research and development affects the productive capacity of countries, for this reason, the States will be responsible for its increase according to adequate criteria and indicators.
4. Sustainability as an organizational culture is the foundation for the design of public funding policies for higher education. In this context, higher education institutions will design outreaching strategies for society to know and assume the Sustainable Development Goals (SDG) and the 2030 Education Agenda and work towards its achievement.
5. The criteria of sustainable development in relation to higher education may:
 - a) be applied in their plans, programs, policies, strategies and actions, especially in the orientation of the investment for those purposes; and,
 - b) establish research, development and innovation programs and projects, and proposals for its transformation, jointly with public entities and social productive organizations.
6. Access, inclusion and equity, quality and relevance are, together, a strategic regional objective of an at distance and virtual higher education system duly regulated, with renewed and flexible curricular designs, which takes advantage of free access to technology and educational resources.



7. Tertiary education is essential for the insertion of people in the labor market and the eradication of poverty. Therefore, it is essential to prioritize investment at this level and establish links and compatibilities between the productive sector and higher education institutions. This will make it possible to reduce the gap between the human talent required by the productive sector and the one that is graduating from higher education institutions (HEI).
8. The HEI will be responsible for graduating professionals with technical, professional and cultural skills able to face the challenges of society and contribute to the achievement of the SDGs, and to have access to decent employment and to activate entrepreneurship.
9. Access, inclusion and equity, quality and relevance are, together, a strategic regional objective of a privately managed higher education system, and it is in a position, not only to invest additional financial resources, but also to introduce approaches, experiences and innovations. Similarly, this management system should continue to aim, along with public institutions, to achieve this strategic objective.
10. For-profit private education does not fall within the scope of the principle of “national treatment”; on the other hand, public subsidies and other public policy tools that are granted to a national institution should be granted to others, regardless of whether they are public or private, national or foreign.
11. The Regional Conference on Higher Education 2018 ratifies its rejection of the conception of higher education as a service. Higher education is not part, neither now nor in the future, of the negotiations of international commercial forums.

Centennial of University of Córdoba Reform. Towards a new Manifesto of the Latin American Higher Education

In order to continue with the spirit and the principles of the 1918 Reform, the Declarations adopted in the Regional Conference, held in Havana, Cuba in 1996, the Regional Conference of Higher Education for Latin American and the Caribbean held in 2008 and the World Conference on Higher Education held in 1998 are hereby endorsed. Higher education is a public, social good, and a human right which should be ensured by the State. Knowledge should be considered a social public good. The State should regulate the higher education system, and it should prohibit all higher education institutions that are for profit.



The current political context in the region leading, in some countries, to the persecution of university authorities, violence against students, economic adjustments and a violation of university autonomy is a historical regression. All these violations should be strongly condemned.

The higher education institutions of Latin America and the Caribbean should defend the political and social rights, and critically advocate for their insertion in the face of a neoliberal development model. Thus, they shall contribute, with social responsibility and commitment to new proposals which recreate the traditions of autonomy, social transformation, anti-authoritarianism, democracy, freedom of teaching, and specifically a political influence based on knowledge and reason.

Social commitment should be accompanied by equality, full democracy, economic development, creation of and access to culture and the arts, and the defense of human rights. This commitment implies that higher education should be part of the society, and it should uphold democratic principles in all its spheres of action.

Autonomy is an essential condition if the institutions are to play a critical proactive role in the society. This is based on the right to have access to decision making, to representation and full democratic participation expressed in the co-governance as well as in the transparency and accountability of their actions.

It is essential to achieve full gender equality, to eradicate harassment and other forms of gender violence, and to establish affirmative action programs and policies to increase the presence of academic women in postgraduate courses and in the management of universities.

We propose that universal coverage be guaranteed for all between the ages of 18 and 23. The procedures for access should be reviewed, affirmative action policies which do not discriminate on the basis of gender, ethnicity, class, disability should be established, and social inclusion should be expanded.

Public higher education should be free, and it should be accompanied by a system of grants for low income students and students from marginalized populations

1. Reaffirmation of the fundamental role of Latin American and Caribbean public universities in society.

We ratify the central role of the region's public universities since they are privileged spaces for the construction of bridges between global trends and national identities. They are the main institutions in the public sphere for reflective understanding and criticism –based on knowledge– of contemporary society, and are fundamental institutions for the production of knowledge, attending to a very broad set of social concerns, demands and problems in various fields.



2. It is necessary to reaffirm the identity of the University of LAC, as opposed to the standardized hegemonic model of an elitist university. To this end, the question of the inseparable nature of teaching, research and extension, of the identity and tradition of its history with its mission and purposes must be included in the definitions and policies of the Latin American public university. This makes it possible for it to assume a relevant role in society regarding its contribution for creative, productive and cultural development.
3. We confirm the commitment of the LAC Universities to the transformation and democratic progress of our societies. Universities should participate in national and international discussions on knowledge and scientific and technological development, as well as on intellectual property (patents and application of knowledge in products) and on the right to traditional knowledge.
4. In the present, it is an unavoidable obligation to participate in the discussion about the philosophy and orientation of education in our countries; to produce teaching materials and promote pedagogical innovations; to contribute to the training of teachers and to present alternative public policies in this sector.
5. The crisis of the political institutions and republican bases that the region's countries are going through, pose new political responsibilities towards society. In this sense, the ideology of the University Reform of Córdoba is reaffirmed, its university model proposes a social, educational and essentially political project with a special Latin American perspective. In addition, the University's firm and inescapable commitment to republican values, social democracy and human rights must be reasserted.
6. The autonomy that is being demanded is that which allows the university to exercise its critical and proactive role vis-à-vis society, without restrictions and limits imposed by the governments of the day, religious beliefs, the market or particular interests. The defense of university autonomy is an inescapable and highly relevant responsibility in Latin America and the Caribbean and is, at the same time, a defense of the university's social commitment.
7. It is necessary to include universal coverage in higher education as a strategic goal in line with the Sustainable Development Goal (SDG) of the Development Agenda. To achieve this, a vigorous policy of expansion of the public proposal of free higher education is required. It should be in line with an in-depth review of the procedures for accessing the system, establishing a new generation of affirmative action policies -based on gender, ethnicity, class and different capacities- in order to expand social inclusion and diversity in the policies of access, permanence, degree qualifications and graduation.

8. We express our conviction that public higher education in Latin America should be free and a duty of the State, which should assume it as a non-delegable responsibility, guaranteeing the access and permanence of students in higher education. In order to be complete, solid systems of assistance for students with limited economic resources and for those from traditionally marginalized populations should be put into practice.
9. In line with the Sustainable Development Goals set for 2030, it is fundamental to reverse the trends towards a mercantilist education. The SDGs and, in particular, those concerning higher education, require a public commitment and a new pact that includes adequate funding of public higher education institutions as a state policy.
10. The regulation of private higher education is necessary in order to guarantee the quality of education and the rights of those who choose it. There is an important difference among private higher education institutions; those that have arisen, especially in recent years, for profit are different from others that are founded within the educational systems. In order to contribute to the quality of education and the corresponding SDG, we propose the prohibition of higher education institutions for profit in all the countries of the region.
11. There is a delay in LAC in the creation of knowledge associated with fundamental research and, to a greater extent, in its application linked to innovation processes in social and productive spheres. It is important to consider a strategic scientific and technological development program, regionally agreed upon, promoting research applied to contexts related to the most important social, cultural and productive issues, as a goal for the next decade. In line with this, greater public funding for scientific and technological development should be encouraged in each of the LAC countries.
12. A fundamental aspect in the regionalization / internationalization process of the University of LAC is that it should constitute itself as one of the pillars and central actors of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In terms of regionalization-internationalization, this process should boost and strengthen the contribution that the region's universities have made. This has been achieved through joining efforts (national and regional) in order to build the Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Latin American and Caribbean Area for Higher Education) – ENLACES as a representative space of higher education in LAC. The CRES 2018 must propose objectives and goals for its development during the next years.
13. The CRES 2018 axle 7 has to incorporate this aspect as a central and unavoidable issue. It has to do essentially with the spirit of the young reformers of '18, who from their critical and discontented view expressed a university capable of thinking and rethinking itself. Nowadays, this extraordinary exercise of imagining a possible future can be reached depending on the regional agreement expressed today in CRES 2018.
14. We propose the creation of a Program of Higher Education Studies and Prospects for LAC.



FINAL CONSIDERATIONS

Under the framework of the celebration of the 100 years of the Cordoba Reform, the RCHE 2018 ratifies the following principles: higher education is a socio-strategic public asset, a State obligation, a space for knowledge, a human and universal right; its exercise strengthens democracy and makes it possible to overcome inequities. It unfolds its commitment to the human being, to his/her context, to the development of values and ideals that inspire a culture of peace, with respect for human rights in an environment of democratic guarantees in the context of the sustainable development goals.

The declaration of the principle on higher education sets itself within the UNESCO legal framework and regulations. It is inscribed within a humanist conceptual structure, with focus on human development and as an element for social mobility, able of transforming people's lives and their realities. A politically active consideration and commitment to promote access, equity, inclusion, quality, learning and relevance is highlighted. The commitments, demands and challenges we have to face are many and they respond to the solid intention of consolidating our systems and institutions.



RUIICAY LETTER IN FACE OF THE CRES 2018

LETTER FROM THE INDIGENOUS PEOPLES' UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS OF EDUCATION

Córdoba, Argentina, June 14, 2018

Universidad Autónoma Indígena Intercultural (Intercultural Indigenous Autonomous University) UAIIN- Colombia; Universidad Indígena Intercultural Comunitaria Productiva Guaraní (Guarani Productive Intercultural Indigenous University), Pueblos de Tierras Bajas "Apiaguaiki Tupa" ("Apiaguaiki Tupa" Lower Lands People) and Universidad Indígena Intercultural Productiva Quechua "Casimiro Huanca" ("Casimiro Huanca" Quechua Productive Intercultural Indigenous University) Bolivia; Universidad Intercultural Amawtay Wasi (Amawtay Wasi Intercultural University), Ecuador; Consejo QOMPI (QOMPI Council), Centro Educativo Integral QATAXAC NAM QOMPI- IES – CESBI Pampa del Indio Chaco (Integral Educational Center QATAXAC NAM QOMPI – IES – CESBI of the Pampa del Indio Chaco), and Instituto de Educación Superior Intercultural "Gloria Pérez", ("Gloria Pérez" Intercultural Higher Education Institute), Argentina; Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional de Panama (National University of Panama Indigenous Peoples' Office), Panama; Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense (University of the Autonomous Regions of the Nicaraguan Caribbean Coast) –URACCAN- Nicaragua; Universidad Ixil (Ixil University) and Universidad Maya Kakchikel (Kakchikel Maya University) Guatemala; and the Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (the Abya Yala Intercultural and Communitarian Indigenous Universities Network) "RUIICAY".

TO THE REGIONAL CONFERENCE OF HIGHER EDUCATION (CRES 2018)

Within the framework of CRES 2018, which took place in Cordoba, Argentina, on June 11, 12 and 13, 2018, Doctor Alta Hooker, URACCAN Rector and RUIICAY Coordinator, delivered the Conference "Interculturality and Internationalization from a Latin American and Caribbean Perspective" and in The Symposium Thematic Axle "Higher Education, Cultural Diversity and Inter-culturality in Latin America" which was also held. The Intercultural and Communitarian Indigenous



Universities that attended these events decided to open a space of discussion and exchange of experiences, which had the following results:

1. Our recognition to the organizers of the CRES 2018 for having propitiated the approach of intercultural issues and cultural diversity in higher education in Latin America and the Caribbean, which has allowed us to promulgate our word and our own experiences on university education, thus making our contribution to the CRES 2018.
2. Interculturality, understood as a way of promoting cultural diversity and the values of our millenarian cultures, permitted important steps in favor of our Indigenous and Afro-descendant Peoples in conventional universities during the last decades. For examples on specific programs with indigenous contents, training of intercultural professionals, positive actions favoring young people, among others. However, we must affirm that the historical debt of the States and the higher education institutions (HEI) towards Indigenous and Afro-descendant Peoples persists. This manifests itself by the lack of recognition and respect for our educational and cultural institutions, by the academy that turns us into objects of study instead of protagonists, the loss of indigenous culture by those who attend the universities, and even by epistemic violence or the devaluation of our concepts and indigenous pedagogy, among others.
3. Within the Regional Conference on Higher Education (CRES 2018) framework, we want to share with the States and HEI that, during the last decades, our grandmothers and grandfathers, our wise people, and our indigenous communities, by means of a shared effort with our social organizations and community authorities, have begun a process of reconstruction and re-creation of our indigenous and afro-descendant educational, social, cultural and spiritual institutions. Our universities and educational institutions with their own curricula, pedagogies, identity and symbols, are born inter-cultural, reaffirming their indigenous and afro-descendant content and character. At the same time, they also seek access to other cultures, educational systems, knowledge, sciences and cultures aiming for a pluri-cultural and inter-cultural education constituting processes of growing pluri-diversity.
4. Our universities and educational institutions have been created under the constitutional laws of our countries. They apply international conventions such as the ILO 169 Convention, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, OAS Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Afro-descendant People's Declaration of the Decade, the Sustainable Development Goals; and exercise the universal right to decide their own and their future generation's destiny. However, only some States recognize the institutionalism of our Universities and Educational Institutions and give them financial support. Other cases

are in process, and in several cases, our Universities and higher education institutions (HEI) are simply not recognized or respected. Nevertheless, many of these institutions of indigenous and afro-descendant people exist, some are being created and others are growing, becoming a part of the cultural and educational wealth of our countries.

5. Earth, our territories and their natural assets, that are part of the contents of our universities and educational institutions that have the goals of educating our people for the life and the good living, recovering solidarity through our worldviews and pedagogies, dreams and hopes, and forms of evaluation and accreditation. All this in exercise of our right to education as a public and social asset, a universal human right and an obligation of the States and of the higher education institutions (HEI), which also have an institutional responsibility to support and accompany to harmonize in a joint and respectful way, both educational and cultural processes.
6. In closing our message to CRES 2018, we value and support the efforts of the Indigenous Community QOM and other Indigenous and Afro-descendant Peoples of Argentina and of all our America that are trying to re-build their own universities or different forms of educational institutions. We reiterate our recognition for the opportunity to promulgate our word and our own experiences on education, and we express our commitment to continue participating with actions and proposals in the dialogue between knowledge promoted by the Regional Conference on Higher Education (CRES 2018).

Córdoba, Argentina, June 14, 2018.

Presented at the assembly of the III Regional Conference of Higher Education held at the National University of Cordoba, on the 14th day of the month of June 2018.



APRESENTAÇÃO DA CRES 2018

As Conferências Regionais de Educação Superior (CRES) foram convocadas pelo Instituto Internacional da UNESCO para a Educação Superior da América Latina e o Caribe, com uma periodicidade de dez anos aproximadamente. A primeira Conferência foi realizada em Havana, Cuba, em 1996. A segunda aconteceu em Cartagena das Índias, em 2008. Em 15 de junho de 2016 foi assinado o Memorando de Entendimento entre o Instituto Internacional da UNESCO para a Educação Superior da América Latina e o Caribe (IESALC), a Universidade de Córdoba (UNC), o Conselho Interuniversitário Nacional (CIN) e a Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) do Ministério de Educação da Argentina, que permitiu a realização da Terceira Conferência Regional de 11 a 14 de junho de 2018 no âmbito do centenário da Reforma Universitária de 1918.

Os objetivos da Conferência Regional de Educação Superior (CRES 2018) refletiram um constante processo de estudo e reflexão sobre a educação superior da América Latina e o Caribe. Desse modo, a Conferência de Córdoba teve como objetivos (a) contribuir com a consolidação dos sistemas de educação superior na região e (b) gerar espaços de pesquisa e inovação para o desenvolvimento humano, a convivência democrática e a cidadania, com base nos princípios de tolerância, solidariedade e compromisso social. Daí decorrem a Declaração da CRES 2018 como um instrumento orientador das diretrizes estratégicas do setor e o Plano de Ação, com o respectivo roteiro de atividades. A Conferência de Córdoba se baseou em sete eixos temáticos, em cada um deles participaram pesquisadores de toda a América Latina e o Caribe.

Durante as etapas anteriores à Conferência de Córdoba, foram realizados encontros temáticos preparatórios, fóruns virtuais, reuniões, seminários, eventos e uma ampla gama de mecanismos de consulta e análise, para incluir todas as visões possíveis e dar espaço à maior quantidade de atores, instituições e governos interessados. Aproximadamente 12 mil pessoas participaram na Conferência de maneira presencial e virtual.

O programa geral se organizou em conferências centrais, fóruns, simpósios sobre os eixos temáticos da Conferência e mesas de debate. A CRES 2018 contou com um programa de atividades complementares, apresentações de livros e encontros de associações, autoridades, redes universitárias e redes temáticas.

Na cerimônia de encerramento da CRES o diretor da UNESCO-IESALC, Pedro Henríquez Guajardo; o reitor da Universidade Nacional de Córdoba, Hugo Juri, e o coordenador geral da CRES 2018, Francisco Tamarit, leram o preâmbulo da Declaração. Após a conclusão da CRES 2018 foi iniciado um processo de formulação do Plano de Ação 2018-2028 com uma equipe multidisciplinar que sistematizou resultados a partir da Declaração, documentos propositivos e outros documentos oficiais emanados da Conferência regional.

O Plano de Ação envolve a abertura prospectiva do decênio 2018-2028 no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda de Educação 2030 da UNESCO. É um processo de produção coletiva que foi pensado em todas suas etapas, ações e estratégias. Sua adoção definitiva ocorrerá na IX Reunião de Redes Universitárias e Conselhos de Reitores que será convocada pela UNESCO-IESALC no mês de março de 2019.

Este Plano de Ação CRES 2018 é o resultado de um rigoroso processo gerencial, acadêmico e técnico que será a contribuição regional da América Latina e o Caribe para a próxima Conferência Mundial de Educação Superior.

Este documento contém o texto da Declaração da Conferência regional, os resumos dos eixos temáticos e a Carta das Universidades e Instituições de Educação dos Povos Indígenas lida no encerramento da Conferência regional.

Pedro Henríquez Guajardo

Diretor da UNESCO-IESALC



DECLARAÇÃO DA CRES 2018

Mulheres e homens da América Latina e do Caribe:

As vertiginosas mudanças que se produzem na região e no mundo em crises nos convocam a lutar por uma mudança radical, por uma sociedade mais justa, democrática, igualitária e sustentável.

Há um século, os estudantes reformistas proclamaram que “as dores que ficam são as liberdades que nos faltam” e não podemos esquecer, porque ainda ficam e são muitas, porque ainda não se apagaram da região a pobreza, a desigualdade, a marginalização, a injustiça e a violência social.

Os universitários de hoje, como aqueles há um século, pronunciam-se a favor da ciência com humanismo e da tecnologia com justiça, pelo bem comum e os direitos para todas e todos.

A III Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e do Caribe ratifica os acordos alcançados nas Declarações da Reunião da Havana (Cuba) de 1996, da Conferência Mundial de Educação Superior de Paris (França) de 1998 e da Conferência Regional de Educação Superior celebrada em Cartagena das Índias (Colômbia) em 2008 e reafirma o postulado da Educação Superior como um bem público social, um direito humano e universal, e um dever dos Estados. Estes princípios se fundam na convicção profunda de que o acesso, o uso e a democratização do conhecimento é um bem social, coletivo e estratégico, essencial para poder garantir os direitos humanos básicos e imprescindíveis para o bem-estar dos nossos povos, a construção de uma cidadania plena, a emancipação social e a integração solidária latino-americana e caribenha.

Reivindicamos a autonomia que permita às instituições de educação superior (IES) exercer seu papel crítico e propositivo perante a sociedade, sem que existam limites impostos pelos governos da hora, crenças religiosas, mercado ou interesses particulares. A defesa da autonomia das IES é uma responsabilidade iniludível e de grande atualidade na América Latina e no



Caribe e é, ao mesmo tempo, uma defesa do compromisso social da educação superior.

Pensar que a educação, a ciência, a tecnologia e as artes resolverão os problemas prementes da humanidade é importante, mas não suficiente. Elas devem ser, assim, um meio para a liberdade e a igualdade, garantindo-as sem distinção social, de gênero, etnia, religião nem idade. O diálogo de saberes para ser universal deve ser plural e igualitário, para possibilitar o diálogo das culturas.

As diferenças econômicas, tecnológicas e sociais entre o norte e o sul e as diferenças internas entre os Estados não desapareceram, mas sim aumentaram. O sistema internacional promove a livre troca de mercadorias, mas aplica regulamentos migratórios exclusivos. A alta migração da população latino-americana e caribenha mostra o outro lado da falta de oportunidades e desigualdades que afeta, sobretudo, as populações mais jovens.

A desigualdade de gênero se manifesta na diferença salarial, na discriminação no mercado de trabalho e no acesso a cargos de decisão no Estado ou nas empresas. As mulheres de populações originárias indígenas e afrodescendentes mostram os piores indicadores de pobreza e marginalização.

A ciência, as artes e a tecnologia devem constituir-se em pilares de uma cooperação para o desenvolvimento equitativo e solidário da região, baseadas em processos de consolidação de um bloco economicamente independente e politicamente soberano.

As débeis regulamentações da oferta externa aprofundaram os processos de transnacionalização e a visão mercantilizada da educação superior, impedindo, quando não cerceando, em muitos casos, o efetivo direito social à educação. É fundamental reverter esta tendência e instarmos os Estados da América Latina e do Caribe a estabelecer rigorosos sistemas de regulação da educação superior e de outros níveis do sistema educacional.

A educação não é uma mercadoria. Por isso, instamos os nossos Estados nacionais a não subscrever acordos bilaterais ou multilaterais de livre comércio que impliquem conceber a educação como um serviço lucrativo, ou encorajem formas de mercantilização em qualquer nível do sistema educacional, assim como também incrementar os recursos destinados à educação, à ciência, à tecnologia e às artes.

É imprescindível que os Estados assumam o compromisso irrenunciável de regulamentar e avaliar as instituições e cursos, de gestão pública e privada,



qualquer que seja a modalidade, para fazer efetivo o acesso universal, a permanência e o término da educação superior, atendendo a uma formação de qualidade com inclusão e relevância local e regional.

De maneira similar ao ano 1918, atualmente “a rebeldia detona” na América Latina e no Caribe, e em um mundo onde o sistema financeiro internacional concentra-se nas minorias poderosas e empurra as grandes maiorias para as margens da exclusão, da precariedade social e laboral.

Não obstante às enormes conquistas alcançadas no desenvolvimento dos conhecimentos, da pesquisa e dos saberes das instituições de educação superior e dos povos, um setor importante da população latino-americana, caribenha e mundial encontra-se sem acesso aos direitos sociais básicos, ao emprego, à saúde, à água potável ou à educação.

Em pleno século XXI, milhares de crianças, jovens, adultos e idosos estão excluídos do atual progresso social, cultural, econômico e tecnológico. Ademais, a desigualdade regional e mundial é tão pronunciada que em muitas situações e contextos existem comunidades que não têm acesso à educação superior, porque esta ainda segue sendo um privilégio e não um direito, como ansiavam os jovens em 1918.

No Centenário da Reforma, não somos alheios ao sofrimento humano nem ao mandato da história. Não podemos seguir indiferentes ao dever da ordem coletiva, à luta pela verdade heroica e ao anseio transcendente da liberdade humana. A educação superior deve constituir-se a partir das lideranças locais, estaduais, nacionais e internacionais, tal e como agora estão aqui representados plenamente. A partir destes posicionamentos será possível levar adiante uma nova e histórica transformação da educação superior através do compromisso e da responsabilidade social, para garantir o pleno exercício ao direito à educação superior pública, gratuita e de amplo acesso.

Em consonância com o quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda de Desenvolvimento adotada pela UNESCO (Agenda Educação 2030), instamos os Estados a promover uma vigorosa política de ampliação da oferta de educação superior, a revisão em profundidade dos procedimentos de acesso ao sistema, elaboração de políticas de ações afirmativas — com base em gênero, etnia, classe e capacidades diferentes— para garantir o acesso universal, a permanência e a titulação.

Neste contexto, os sistemas de educação superior devem pintar-se de muitas cores, reconhecendo a interculturalidade dos nossos países e comunidades, para que a educação superior seja um meio de igualdade e de ascensão social e não um ambiente de reprodução de privilégios. Não podemos ficar calados perante as carências e as dores do homem e da mulher, como sustentou Mario Benedetti com veemência, “há poucas coisas tão ensurdecedoras como o silêncio”.

Há um século, os estudantes Reformistas denunciaram com firmeza que naquela Córdoba e em um mundo injusto e tirânico, as universidades haviam se convertido no “fiel reflexo destas sociedades decadentes que se empenham em oferecer o triste espetáculo de uma imobilidade senil”. O tempo passou e essa mensagem carregada de futuro nos interpela e nos atravessa como uma flecha ética, para questionar nossas práticas. O que aportamos para a edificação de uma ordem justa, a igualdade social, a harmonia entre as Nações e a impostergável emancipação humana?; como contribuímos para a superação do atraso científico e tecnológico das estruturas produtivas?; qual é a nossa contribuição para forjar a identidade dos povos, à integridade humana, à igualdade de gênero e ao livre debate das ideias para garantir a fortaleza das nossas culturas locais, nacionais e regionais?

É por isso que acreditamos fidedignamente que as nossas instituições devem comprometer-se ativamente com a transformação social, cultural, política, artística, econômica e tecnológica que é hoje imperiosa e indispensável. Devemos educar os dirigentes do amanhã com consciência social e com vocações de irmandade latino-americana e caribenha. Forjemos comunidades de trabalho onde o desejo de aprender e a construção dialógica e crítica do saber entre docentes e estudantes seja a regra. Construamos ambientes democráticos de aprendizagem, onde se desenvolvam as manifestações vitais da personalidade e se expressem sem limites as criações artísticas, científicas e tecnológicas.

A educação superior a construir deve exercer sua vocação cultural e ética com a mais plena autonomia e liberdade, contribuindo para gerar definições políticas e práticas que influam nas necessárias e almejadas mudanças das nossas comunidades. A educação superior deve ser a instituição emblemática da consciência crítica nacional da nossa América Latina e do Caribe.

As instituições de educação superior estão convocadas a ocupar um papel preponderante na promoção e fortalecimento das democracias latino-americanas e caribenhas, rejeitando as ditaduras e o desrespeito às liberdades públicas, aos direitos humanos e a toda forma de autoritarismo na região.

Expressamos nossa solidariedade com as juventudes, da nossa América Latina, do Caribe e do mundo, cujas vidas celebramos, e reconhecemos, nas suas lutas e anseios, as nossas próprias aspirações a favor da transformação social, política e cultural.

A tarefa não é simples, mas é grande a causa e ilumina o resplendor da sua verdade. Trata-se, como profetizou o Manifesto Liminar, de manter alto o “sentido de um presságio glorioso, a virtude de um chamado à luta suprema pela liberdade”.

Mulheres e homens da América Latina e do Caribe, olhemos para o futuro e trabalhemos sem pausa na reforma educacional permanente, no renascer da cultura e da vida das nossas sociedades e povos.



EIXOS TEMÁTICOS

A educação superior como parte do sistema educativo da América Latina e do Caribe

A educação superior é hoje uma aspiração dos jovens que se formam na educação básica e de muitos adultos que não conseguiram ter acesso oportunamente a este nível educacional. A demanda crescente pelo acesso à educação superior exige que esta se encarregue de atender múltiplas necessidades e, portanto, que diversifique sua oferta em diferentes tipos de instituições, de programas, de modalidades de ensino – aprendizagem, de estratégias de formação. Hoje, quando falamos de educação superior, nos referimos a um conjunto amplo e diverso, que vai muito além de nossa concepção tradicional, em que identificávamos educação superior com universidade.

Neste contexto, a articulação da educação superior com os outros níveis do sistema educativo se faz imprescindível. No entanto, a educação superior, ainda que critique a formação dos estudantes que recebe, não assume cabalmente seu compromisso, sobretudo no que se refere à qualidade da formação de docentes. Este é um aspeto crítico que é preciso abordar, tanto do ponto de vista das instituições de educação superior como do correspondente às políticas públicas: para as primeiras, é preciso priorizar uma formação de qualidade, centrada nas necessidades vigentes das crianças e jovens. As autoridades públicas, por sua parte, devem ser responsáveis pelo desenho e implementação de políticas que revalorizem a profissão docente, reconheçam sua centralidade e recompensem adequadamente o desempenho educativo.

É também fundamental abordar o tema da qualidade, em um contexto de diversidade. Isto exige definir qualidade com a participação dos principais atores sociais, estabelecer indicadores apropriados às características dos propósitos formativos das instituições, incluindo como valores a inclusão, a diversidade e a relevância.



Devem ser desenvolvidas políticas e mecanismos que não se limitem a avaliar, mas também a promover a qualidade e apoiar as instituições para que sejam elas as que, em função de uma autonomia responsável, assumam o compromisso de avançar de maneira sustentável em sua capacidade de resposta às necessidades dos estudantes e do meio social no qual se desenvolvem.

Para que a educação superior contribua cada vez mais ao bem viver da região é preciso promover também a articulação entre as instituições de educação superior e destas com os diversos setores sociais e garantir oportunidades formativas para todas e todos ao longo da vida.

1. Os governos e as instituições de educação superior devem buscar acordos, programas e arranjos institucionais que reconheçam conhecimentos, habilidades e estudos prévios, bem como as respectivas credenciais e certificações, adquiridas no mesmo ou em outros sistemas de educação superior, em educação média ou no ambiente laboral, promovendo iniciativas que reforcem a aprendizagem ao longo da vida, superando os currículos terminais.
2. É necessário atender desde o começo as necessidades reais dos estudantes, com base nas expectativas exigidas pelas instituições de educação superior. Devem ser gerados processos que facilitem a transição entre a educação média e a superior, com programas vocacionais, de apoio e nivelamento, através da reestruturação curricular.
3. A flexibilização dos currículos é urgente. É necessário revisar as estruturas curriculares a fim de organizá-las por competências, reduzir os conteúdos na formação de graduação e ampliar as oportunidades na pós-graduação. O resultado desta revisão deve levar a trajetórias educacionais abertas (como a acreditação de módulos e não de disciplinas) e orientar-se ao reconhecimento de qualificações constatáveis.
4. Os Estados e as instituições de educação superior devem desenvolver estratégias de vinculação e programas colaborativos, nos níveis de graduação e pós-graduação garantindo os recursos para a inovação, a ciência, a tecnologia e pesquisa, evitando, assim, a separação entre a educação superior e o ambiente produtivo.
5. A acreditação deve basear-se em avaliações simultâneas das carreiras dentro da mesma área de conhecimento, integrando os aspectos institucionais (aspectos financeiros, administrativos e gerenciais) e acadêmicos (formação profissional) a fim de realizar análises comparativos e promover mecanismos de regulação e avaliação das agências de acreditação, com o objetivo de garantir critérios internacionais de credibilidade e eficácia.



Educação superior, diversidade cultural e interculturalidade na América Latina

As políticas e as instituições de educação superior devem contribuir de uma maneira proativa para desmontar todos os mecanismos geradores de racismo, sexismo, xenofobia, e todas as formas de intolerância e discriminação. É imperativo que se garantam os direitos de todos os grupos de população discriminados por raça, etnia, gênero, situação socioeconômica, deficiência, orientação sexual, religião, nacionalidade e migração forçada. É inequívoco que se destinem recursos financeiros e esforços de pesquisa, ensino e extensão /vinculação para estes fins.

É preciso promover a diversidade cultural e a interculturalidade em condições equitativas e mutuamente respeitadas. O desafio não é só incluir nas instituições de educação superior as mulheres, pessoas com deficiência, membros de povos indígenas e afrodescendentes e indivíduos de grupos sociais historicamente discriminados, senão transformá-las para que sejam social e culturalmente relevantes. Estas mudanças devem assegurar a incorporação nas instituições de educação superior das cosmovisões, valores, conhecimentos, saberes, sistemas linguísticos, formas de aprendizagem e modos de produção de conhecimento de ditos povos e grupos sociais.

É iniludível reconhecer e valorizar as epistemologias, modos de aprendizagem e concepções institucionais próprios de povos indígenas e afrodescendentes, comunidades camponesas e outras socioculturalmente diferenciadas. Tudo isto deve ser assegurado por políticas e mecanismos de garantia da qualidade apropriados, para o qual devem utilizar-se indicadores específicos e impulsionar a livre participação de representantes destes grupos.

A educação não só é um direito humano senão também um direito dos povos. Existe uma importante dívida histórica dos Estados e sociedades latino-americanas e caribenhas com os povos indígenas e afrodescendentes. Embora seus direitos sejam reconhecidos em numerosos instrumentos internacionais e na maioria das constituições nacionais, existe um alarmante déficit na disposição efetiva dos mesmos, inclusive na educação superior. As instituições de educação superior devem garantir o acesso efetivo destes direitos e educar a população em geral, e particularmente a suas comunidades, contra o racismo e todas as formas de discriminação e formas conexas de intolerância.

É fundamental promover e facilitar a aprendizagem das línguas dos povos indígenas e afrodescendentes e seu uso efetivo nas práticas de docência, pesquisa e extensão. A formação de docentes interculturais bilíngues para todos os níveis dos sistemas educativos é um dever prioritário da educação superior.



1. As instituições de educação superior (IES) têm a obrigação jurídica, ética, social e política de aplicar os direitos dos povos indígenas e afrodescendentes de maneira efetiva.
2. As instituições de educação superior têm a obrigação de educar com relação à aplicação de direitos, contra o racismo e todas as formas de discriminação racial e formas conexas de intolerância à população em geral, particularmente, a seus próprios educadores, pesquisadores, funcionários e diretores, bem como a aqueles que fornecem formação profissional, científica e humanística.
3. As políticas públicas e institucionais de educação superior devem contribuir de maneira proativa para dismantelar todos os mecanismos geradores de racismo, discriminação e todas as formas de intolerância que ainda estão em vigor nas sociedades latino-americanas.
4. É imperativo que as políticas públicas e institucionais garantam não apenas o direito dos povos indígenas e afrodescendentes, mas também os direitos de todos os grupos de população frequentemente discriminados em termos de gênero, raça, etnia, religião, idade, situação socioeconômica, orientação sexual, deficiência/capacidades especiais e situações de deslocamento forçado. É iniludível que as instituições de educação superior orientem os esforços de pesquisa, ensino e extensão/vinculação para esses fins.
5. As IES devem promover a diversidade cultural e a interculturalidade em condições equitativas e mutuamente respeitadas. O desafio não é apenas incluir povos indígenas, afrodescendentes e outras pessoas culturalmente diferenciadas em instituições como existem atualmente, mas transformá-las para que sejam relevantes com a diversidade cultural. É imperativo incorporar os conhecimentos, saberes tradicionais e modos de produção de conhecimento dos povos indígenas e afrodescendentes e que isto seja realizado com a participação informada e ativa de representantes desses povos.
6. As políticas públicas e institucionais de educação superior devem promover e facilitar o aprendizado de línguas nativas americanas.
7. As políticas públicas e os mecanismos de acreditação institucional da educação superior devem reconhecer e valorizar as experiências das instituições de educação superior dos povos indígenas e afrodescendentes, suas contribuições para a resolução de problemas sociais e suas inovações educativas. Para isso devem incorporar em sua definição indicadores específicos e garantir a inclusão informada e oportuna de profissionais e representantes dos povos citados nos processos de avaliação e acreditação.



Educação superior, internacionalização e integração regional da América Latina e do Caribe

Na América Latina e no Caribe, –garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade– (CEPAL, 2016) constitui um dos fundamentos para a necessária mudança social e econômica. Sua conquista está relacionada com o desenvolvimento de competências que permitam à região, seus países e cidadãos, atuar com propriedade em cenários complexos e inserir-se de forma efetiva em uma dinâmica mundial baseada no conhecimento. Isto demanda mudanças nos sistemas educativos e nas instituições, que considerem a cooperação, a construção solidária de saberes e a transferência de recursos entre regiões, países e instituições. Na região, a internacionalização deve sustentar uma cooperação interinstitucional baseada em uma relação solidária entre iguais, com ênfases na cooperação Sul-Sul e a integração regional. Deve promover o diálogo intercultural, respeitando a idiosincrasia e identidade dos países participantes, fomentar a organização de redes interuniversitárias e fortalecer as capacidades nacionais mediante a colaboração interinstitucional e a interação com pares acadêmicos em escala regional e internacional. Isto propiciará a circulação e a apropriação do conhecimento como bem social estratégico, a favor do desenvolvimento sustentável da região e o dos seus países.

Neste contexto, a internacionalização se constitui em uma ferramenta chave para transformar a educação superior, fortalecer suas comunidades e promover a qualidade e pertinência do ensino, da pesquisa e da extensão. Favorece a formação de cidadãos e profissionais, respeitosos da diversidade cultural, comprometidos com o entendimento intercultural, a cultura de paz e com capacidade para conviver e trabalhar em uma comunidade local e mundial. Sua antítese seria a concepção de uma internacionalização mercantilista que favoreça os interesses hegemônicos e desnacionalizantes da globalização.

O cumprimento de todos estes objetivos requer estratégias sistêmicas, integrais, compreensivas e transversais a todas as políticas de desenvolvimento institucional. Assim mesmo, necessitam-se políticas públicas que apoiem o processo de internacionalização mediante o estabelecimento de marcos organizacionais que facilitem a integração acadêmica regional, a mobilidade de estudantes e acadêmicos, o reconhecimento de trajetórias formativas internacionais, a dimensão internacional dos programas acadêmicos e a colaboração internacional em pesquisa, entre outros.

1. Reconhecemos uma internacionalização humanista e solidária que contribua para uma maior e melhor compreensão e cooperação entre as culturas e as nações, a partir de uma colaboração interinstitucional baseada na solidariedade e no respeito mútuo.
2. A geminação entre as universidades e outras instituições de educação superior nutrem a criação, fortalecimento e consolidação das capacidades nacionais dos

países envolvidos. Isso garante a diversidade de fontes acadêmicas nos campos de pesquisa e produção de conhecimento, a nível regional e global.

3. As instituições de educação superior contribuem à elaboração consensual de projetos da nação desde seus próprios projetos educativos, comprometendo todo o ensino de pesquisa e de serviços.
4. A internacionalização será um impulso para transformar o setor educativo terciário com estratégias sistêmicas, abrangentes, compreensivas e transversais permeando todas as políticas de desenvolvimento institucional em torno dos conteúdos e estruturas curriculares.
5. A internacionalização é um meio estratégico para a produção de conhecimento com uma perspectiva baseada na colaboração internacional. É um processo para inovar e melhorar a qualidade e relevância da educação terciária no desenvolvimento de competências globais e interculturais nos estudantes.
6. As políticas públicas e institucionais são decisivas para consolidar a institucionalização da dimensão internacional no trabalho universitário e nos três níveis do processo educativo: o micro (processo de ensino-aprendizagem na sala de aula), o médio (estrutura e conteúdo curriculares), e o macro (projeto de políticas institucionais sobre docência, pesquisa e divulgação).
7. A dimensão internacional é um componente intrínseco das políticas científicas nacionais e dos instrumentos de desenvolvimento científico e de pesquisa sob esquemas colaborativos para a integração regional, mediante:
 - a) A promoção e financiamento da internacionalização da pesquisa,
 - b) O aumento e consolidação do capital de relações internacionais dos pesquisadores,
 - c) A introdução da dimensão internacional nos programas de pós-graduação para a formação de pesquisadores,
 - d) A melhoria da qualidade, relevância, produtividade e visibilidade da pesquisa.
8. A internacionalização da educação superior será consolidada com base em uma política e estratégia regional de desenvolvimento científico, que permita coordenar esforços, fortalecer os recursos e multiplicar os programas.
9. Os governos da região precisam promover, aprofundar e consolidar a vontade política de integração regional. Em relação à educação superior, é imperativa



uma articulação permanente entre políticas públicas e institucionais para construir uma comunidade acadêmica regional que respeite a diversidade e, simultaneamente, reconheça a validade de outros sistemas e instituições.

10. No ensino superior regional é essencial estabelecer políticas, estruturas de coordenação, programas de abrangência regional e a correspondente estrutura financeira para fortalecer e ampliar os esforços de integração, o trabalho cooperativo e os programas dos diferentes conselhos e associações de universidades nacionais, regionais e internacionais, organizações internacionais e IES.
11. É imperativo aumentar a mobilidade estudantil intra regional por meio de iniciativas inclusivas e esquemas de financiamento que atinjam todos os países da região, possibilitando a incorporação de alunos desfavorecidos.
12. A flexibilização dos programas e currículos, seu reconhecimento e a coordenação dos calendários acadêmicos, são condições básicas para o crescimento da mobilidade da educação superior regional.

Papel da educação superior de cara aos desafios sociais da América Latina e do Caribe

Diante dos tantos desafios sociais que enfrenta a região, a educação deve construir sua qualidade e universalidade no serviço à comunidade local, com foco no desenvolvimento humano de cada entorno, articulando tradição e inovação de ponta, congregando a pluralidade de competências, habilidades e conhecimentos que as pessoas constroem, na convergência da atividade especializada à vida cotidiana, às sabedorias populares e a uma autêntica inteligência ética e estética em harmonia territorial para além de qualquer impacto. É imperioso considerar igualmente a todos como pessoas únicas e inacabadas, como facilitadores de mudança e como agentes de seu próprio desenvolvimento mediante a geração de mecanismos para o crescimento pessoal e social, e para a constituição de comunidades. Quer dizer, a educação superior é coprodutora de conhecimento e inovação, fazendo destes, enquanto saberes articulados a práticas sociais, ferramentas de independência intelectual, transformação social e construção de estruturas políticas mais justas, equitativas, solidárias e, sobretudo, subsidiárias de valores compartilhados autóctones. A região deve ser promotora de ciência para todos, cidadania crítica e governança autêntica, democrática e transparente, para fazer efetiva a construção de relações territoriais reumanizadoras com todos os atores, melhorando os níveis de comunicação entre eles e fazendo possível a escolha das melhores soluções, o qual gera relações de responsabilidade conjunta que facilitam o bem viver.



1. A responsabilidade social das instituições de ensino superior exige uma nova relação com a sociedade e postula uma transformação inovadora do ensino superior.
2. A abordagem limitada da projeção social e extensão universitária, que os visualiza como apêndices da função central da formação estudantil e da produção de conhecimento, deve ser qualitativamente superada e deve identificar o compromisso social da educação superior consistentemente com as novas realidades da sociedade.
3. O compromisso social da educação superior se baseia na promoção de uma educação de qualidade para todos. Implica promover a educação para toda a vida, considerando o aluno como um aliado permanente de um processo em que seus conhecimentos e habilidades estão a disposição da transformação social para o bem de todos, especialmente dos setores mais vulneráveis.
4. A educação superior é chamada a rever profundamente suas ações, a fim de orientar a sociedade e, assim, contribuir para a solução dos problemas crônicos que a afligem. As instituições de educação superior devem se comprometer com os grupos sociais que enfrentam situações diversas de vulnerabilidade, através de projetos de inclusão, de combate à pobreza, de inovação e empreendedorismo social, em prol da justiça social. Nesse contexto, a relação das instituições de educação superior com a sociedade, vinculada ao bem comum, destaca a necessidade de atuar com a totalidade dos atores –instituições ou pessoas–.
5. A responsabilidade social da educação superior supõe o desenvolvimento de compromissos territoriais e transformadores, sob a perspectiva de uma comunidade acadêmica ampliada, na qual o formando é um aliado e transformador social. Nela, o conhecimento, a formação e a ação se cruzam para alcançar um desenvolvimento verdadeiramente justo e sustentável.
6. A formação nas instituições de educação superior é um exercício permanente de re-humanização.
7. As instituições de educação superior devem se vincular com a sociedade para criar e projetar em conjunto novos cenários para a geração democrática de conhecimento superando a visão disciplinar e catedrática da educação.

A pesquisa científica e tecnológica e a inovação como motor do desenvolvimento humano, social e econômico para a América Latina e o Caribe

Não haverá justiça na região se não houver liberdade de pensamento e expressão para a sociedade em seu conjunto; e, não existirá liberdade de pensamento se nossos países não gerarem conhecimentos pertinentes para suas realidades e inovações sociais que transformem sua matriz produtiva primário exportadora e secundário importadora, e disputem a ordem imperante. Reivindicar soberania para imaginar, criar, acessar e aplicar os conhecimentos que precisamos para o bem viver em nossas sociedades é imperativo

aonde as instituições de educação superior jogam um papel estratégico. Não é possível pensar em uma estratégia que separe a superação de distâncias cognitivas injustas sem que paralelamente se abram novas rotas epistêmicas. Estas novas rotas demandam romper com a matriz de pensamento (neo) colonial, (neo) dependente, antropocêntrico, racista e patriarcal que impera ainda em nossas sociedades. Apenas se a aprendizagem do conhecido e a geração de novos conhecimentos se reconciliam, se a teoria e a prática andam de mãos dadas, o conhecimento reforçará a justiça social. Para entender a dimensão da mudança que requer a matriz epistêmica devemos nos remeter à gestão da ciência e aos conhecimentos no sistema de acumulação vigente no mundo. Esta gestão é baseada na construção de um pensamento hegemônico, no qual a função exclusiva da ciência é a acumulação de capital através da produção de inovação tecnológica patenteada só com fins mercantis. Romper essa lógica implica reconhecer os conhecimentos como direitos humanos universais e direitos coletivos dos povos, como bens públicos sociais e comuns para a soberania, bem-estar e emancipação das nossas sociedades, e para a construção da integração latino-americana e caribenha. Em outras palavras, devemos reconhecer que o conhecimento é produto do acervo intelectual e experimental da humanidade, sendo, portanto, um bem comum, e por regra geral, de domínio público.

O rompimento epistêmico assinalado implica reconhecer o papel estratégico das artes e a cultura no processo de produção de conhecimentos com compromisso social, na luta pela soberania cultural e a integração pluricultural das regiões.

A disputa política sobre “que conhecimentos” é, ao mesmo tempo, a disputa política sobre “que sociedade”, “que região” queremos. Não haverá transformação dos conhecimentos sem uma mudança nas relações históricas de poder na América Latina e no Caribe; embora, tampouco haverá mudança nas relações históricas de poder na região sem uma transformação dos conhecimentos.

1. O conhecimento é um direito humano universal e um direito coletivo dos povos, um bem público social e comum para o bem viver, para a soberania e para a emancipação de nossas sociedades, na construção da cidadania latino-americana e caribenha.
2. A função social da ciência e do conhecimento é repensada para garantir a sustentabilidade, a paz, preservar a diversidade cultural, a democracia, a convivência humana e a reprodução da vida.
3. O conhecimento é um recurso comum e bem público, portanto, é exigível pela sociedade a democratização de seu acesso, seu uso e aproveitamento. A equidade de gênero, étnico-racial, de povos e nacionalidades, é garantida no acesso universal ao sistema de ciência tecnologia e inovação e na participação efetiva na geração de conhecimento de todos os atores do sistema.
4. A promoção do desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica responsável e a construção de redes de conhecimento interinstitucionais, com abordagens trans e interdisciplinares, garantem a qualidade e rigor teórico-metodológico.
5. O desenvolvimento de ecossistemas de inovação sociotécnica será baseado na transferência de tecnologia, na desagregação tecnológica e no fechamento de brechas cognitivas.

6. O desenvolvimento humano, social, econômico e cultural da ALC requer a recuperação, revalorização e proteção dos conhecimentos tradicionais e ancestrais no âmbito do respeito à diversidade, à equidade epistêmica e ao diálogo dos saberes.
7. O impulso para uma gestão de conhecimento orientada à construção soberana, livre e colaborativa da ciência, para avançar na construção regional do conhecimento próprio em um contexto de maior integração dos atores da educação superior.
8. A região exige novos e adequados processos de avaliação, de produção e difusão de conhecimento, com padrões de relevância.
9. Os processos de formação de pós-graduação orientados à pesquisa científica e tecnológica na região serão fortalecidos com uma abordagem de relevância social.
10. O uso estratégico do sistema de propriedade intelectual está diretamente relacionado à recuperação do sentido público e comum do conhecimento e das tecnologias.

O papel estratégico da educação superior no desenvolvimento sustentável da América Latina e do Caribe

O desenvolvimento sustentável é uma forma de pensar que projeta o homem a um melhor relacionamento com o contexto, um imperativo categórico que estabelece o valor ético da convivência no mundo. Seu desempenho deve responder às demandas sociais que exigem conhecimentos técnicos, eficientes, oportunos e cuja aplicabilidade aponta para a superação de conflitos e situações de impacto social para alcançar o bem-estar comum. Esta fundamentação estabelece o pensamento sustentável como uma construção epistêmica das ciências sociais, integrada, complexa, interdisciplinar, universal e transformadora de alto conteúdo econômico, social e ambiental para enfrentar a crise civilizatória. Baseia-se na interpretação da realidade dos homens com abordagens multidimensionais de seus problemas para intervir de acordo com a gestão de risco em termos de uma melhor convivência. Portanto, seus princípios são baseados no humanismo, no bem público, no direito humano e na base para garantir a realização de outros direitos.

A educação está imersa em avaliações éticas, por isso a sociedade e a educação se articulam em uma construção indissolúvel do pensamento social e complexo expresso através dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e particularmente com o objetivo 4 da Agenda de Educação 2030 da UNESCO. Este objetivo “garante uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promove oportunidades de aprendizagem permanente para todos”. Então, a dinâmica do pensamento social orienta a discussão sobre a educação superior sob as considerações do pensamento sustentável com abordagens multidisciplinares e dimensões que definem seu desempenho pedagógico, em termos de gratuidade, equidade, qualidade, aprendizagem relevante e efetiva, acessibilidade, empregabilidade, igualdade de gênero, reconhecimento de diferenças, desenvolvimen-



to de conhecimentos teóricos e práticos para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A sociedade e a educação superior, assentados no pensamento sustentável devem estar conscientes das dificuldades, especialmente na realidade atual, em constante mudança, que impõe graus de incerteza, ambiguidade e complexidade. É hora de os acadêmicos, cientistas e todos os membros da sociedade dialogarem, é hora de rever as estruturas das instituições, de inovar em seus compromissos e maneiras de alcançá-los. O objetivo do ensino superior é a formação de um cidadão com pensamento sustentável, que seja o motor da nova sociedade.

Sob essa interpretação, a educação superior na América Latina e no Caribe em sua condição de bem público social-estratégico, direito humano e universal e dever do Estado adquire novas funções, diferentes valores, diferentes desafios, compromissos inéditos e um papel estratégico no desenvolvimento sustentável. As instituições de ES devem estabelecer vínculos mais estreitos com os contextos aos quais pertencem, de modo a torná-las mais relevantes e responsáveis com a sociedade. Devem participar do avanço social, da geração de riqueza, de uma cultura de paz, da integração e identificação social, da luta contra a fome e a pobreza, do crescimento de identidades. Da mesma forma, deve ser proativo na prevenção da mudança climática e da crise energética.

Esses desafios amplos e exigentes fazem com que as instituições de ES se tornem organizações estratégicas para o desenvolvimento dos países, especificamente da ALC. São essas instituições, em grande parte, que contribuirão para reduzir e superar as diferenças entre os países, nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e cultura.

A ideia da sustentabilidade como princípio é que o conhecimento gerado nos espaços acadêmicos possa ser introduzido, utilizado e adaptado nos objetivos sociais, econômicos e ambientais que beneficiem a todas as pessoas, para construir os mecanismos para viver bem e ter melhores sociedades. A educação superior pode nos ajudar a aprender como fazê-lo: (a) aperfeiçoando as estruturas institucionais, (b) recriando sua missão, objetivos, valores, eficácia, financiamento e (c) inovando para satisfazer os compromissos sociais. Daí derivam quatro desafios: 1.- transformar-se em motores de promoção e mobilidade social; 2.- responder às novas exigências que a globalização e as sociedades do conhecimento impõem aos países em desenvolvimento, para gerar uma capacidade própria de produção científica e tecnológica; 3.- conectar-se e se integrar melhor com suas próprias sociedades; e 4.- fortalecer o desenvolvimento de cidadãos responsáveis com os compromissos sociais, com a sustentabilidade e com a construção de melhores sociedades, mais justas, equitativas, pacíficas, baseadas nos valores humanos de convivência democrática.

1. Os resultados dos debates e discussões sobre a autonomia universitária têm que impactar em seu estatuto legal e se desenvolver dentro da Constituição de cada um dos países da região.
2. Os processos de desenho, formulação e aplicação das políticas públicas de educação superior têm que garantir a autonomia acadêmica e financeira e, consequentemente, a sustentabilidade das instituições de educação superior.
3. O investimento em pesquisa e desenvolvimento afeta a capacidade produtiva dos países, por essa razão, os Estados serão responsáveis de seu incremento segundo critérios e indicadores adequados.

4. A elaboração das políticas públicas de financiamento da educação superior está fundamentada na sustentabilidade como cultura organizacional. Nesse contexto, as instituições de educação superior criarão estratégias de divulgação para que a sociedade conheça e se encarregue dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (DS) e da Agenda Educativa 2030 e trabalhe em sua realização.
5. Os critérios de desenvolvimentos sustentável com relação à educação superior poderão:
 - a) Ser aplicados em seus planos, programas, políticas, estratégias e ações, especialmente na orientação do investimento para esses propósitos; e,
 - b) Estabelecer programas e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e propostas de transformação, conjuntamente com instituições públicas e organizações produtivas sociais.
6. O acesso, inclusão e equidade, qualidade e adequação são, em conjunto, objetivo estratégico regional de um sistema de educação superior a distância e virtual especificamente regulado, com projetos curriculares renovados e flexíveis, que aproveita a tecnologia e os recursos educativos de livre acesso.
7. A educação terciária é essencial para a inserção das pessoas no mercado de trabalho e da erradicação da pobreza. Portanto, é imprescindível priorizar o investimento neste nível e estabelecer vinculações e compatibilidades entre o setor produtivo e as instituições de educação superior. Dessa maneira, será possível acabar com a separação entre o talento humano requerido pelo setor produtivo e o setor que está se formando nas instituições de educação superior (IES).
8. As IES serão responsáveis de formar profissionais com competências técnicas, profissionais e culturais para enfrentar os desafios da sociedade e contribuir na consecução dos ODS, assim como para obter um emprego decente e ativar um empreendimento.
9. O acesso, a inclusão e a equidade, a qualidade e relevância são, em conjunto, objetivo estratégico regional de um sistema de educação superior de administração privada, portanto, esta última está em condições não só de investir recursos financeiros adicionais, mas também de introduzir abordagens, experiências e inovações. Igualmente, este sistema de administração tem que continuar apontando, junto com as instituições públicas, ao cumprimento deste objetivo estratégico.
10. A educação privada com fins lucrativos não pertence ao âmbito do princípio do “trato nacional” enquanto os subsídios públicos e outras ferramentas de política pública que são concedidas a uma instituição nacional deveriam ser concedidas a outras, independentemente de seu caráter público ou privado, nacional ou estrangeiro.
11. A Conferência Regional de Educação Superior 2018 ratifica sua rejeição à concepção da educação como um serviço. A educação superior não faz parte, nem na atualidade nem no futuro, das negociações próprias de foros comerciais internacionais.



Aos 100 anos da Reforma Universitária de Córdoba. Em direção a um novo Manifesto da Educação Superior Latino-americana

Para dar continuidade ao espírito e princípios da reforma de 1918, se reafirmam os acordos firmados nas Declarações da Reunião da Havana, Cuba, de 1996, da Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e do Caribe de 2008 e da Conferência Mundial de Educação Superior de 1998. A educação superior é um bem público e social, um direito humano e um dever do Estado. O conhecimento deve ser considerado um bem público social. O Estado deve regular o sistema de educação superior e deve proibir as instituições de educação superior com fins de lucro.

A atual conjuntura política na região, que se expressa, em alguns países, na perseguição de autoridades universitárias, na violência contra os estudantes, em ajustes econômicos e na violação da autonomia universitária significa um retrocesso histórico. Estas violações devem ser enfaticamente condenadas.

As instituições da educação superior da América Latina e do Caribe devem defender os direitos políticos e sociais, e formular criticamente sua inserção frente ao modelo de desenvolvimento neoliberal. Poderá desta maneira contribuir, com responsabilidade e compromisso social, para novas propostas que recriem as tradições de autonomia, transformação social, antiautoritarismo, democracia, liberdade de cátedra e, fundamentalmente, a incidência política fundada no conhecimento e na razão.

Destaca-se o compromisso social com igualdade, democracia plena, desenvolvimento econômico, criação e acesso à cultura e à arte, e defesa dos direitos humanos. Este compromisso implica que a educação superior seja parte da sociedade e se democratize em todos seus âmbitos.

A autonomia é uma condição imprescindível para que as instituições exerçam um papel crítico e propositivo frente à sociedade. Esta se alicerça nos direitos de acesso à tomada de decisões, de representação e de plena participação democrática que se expressa no co-governo, assim como na transparência e na prestação de contas.

É imprescindível alcançar a plena equidade de gênero, erradicar o assédio e outras formas de violência de gênero, assim como estabelecer programas e políticas afirmativas para incrementar a presença de acadêmicas nas pós-graduações e em âmbitos de direção universitária.

Propomos garantir cobertura universal para todos os jovens entre 18 e 23 anos. Devem ser revisados os sistemas de acesso e estabelecer-se políticas de ações afirmativas baseadas em gênero, etnia, classe e deficiência, para ampliar a inclusão social.

A educação superior pública deve ser gratuita e, para ser completa, deve estar acompanhada de sistemas de bolsas para estudantes de baixos recursos e provenientes de populações marginalizadas.

1. Reafirmação do papel fundamental das universidades públicas da América Latina e o Caribe na sociedade.

Ratificamos o papel central das universidades públicas da região já que constituem espaços privilegiados para a construção de pontes entre tendências mundiais e identidades nacionais, que são as principais instituições no âmbito público para a compreensão reflexiva e a crítica —baseada no conhecimento— sobre a sociedade contemporânea e instituições fundamentais para a produção de conhecimentos, assistindo um grande número de preocupações sociais, demandas e problemas de diversos tipos.

2. É preciso reafirmar a identidade da Universidade da ALC, frente ao modelo estandardizado hegemônico da universidade elitista. Para isso, deve-se incluir nas definições e políticas da universidade pública da América Latina a questão da inseparabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão da identidade e a tradição de sua história com sua missão e propósitos. Isso dá a possibilidade de que a universidade ganhe de novo um papel relevante na sociedade sobre o aporte para o desenvolvimento criativo, produtivo e cultural.
3. Confirmamos o compromisso das Universidades da ALC com a transformação e o avanço democrático de nossas sociedades. As Universidades têm que participar nas discussões nacionais e internacionais sobre o conhecimento e o desenvolvimento científico e tecnológico, assim como a propriedade intelectual (patente e aplicação de conhecimentos em produtos) e o direito aos conhecimentos tradicionais.
4. Atualmente, é uma obrigação iniludível participar na discussão sobre a filosofia e orientação da educação em nossos países; produzir material didático e promover inovações pedagógicas; contribuir à formação de professores e apresentar alternativas de políticas públicas neste setor.
5. A crise das instituições políticas e das bases republicanas que vivem os países da região apresenta novas responsabilidades políticas frente à sociedade. Portanto, reafirma-se o ideário da Reforma universitária de Córdoba, cujo modelo de universidade apresenta um projeto social, educativo e essencialmente político com uma especial perspectiva latino americanista. Além disso, tem que se reafirmar o compromisso firme e iniludível da Universidade com os valores republicanos, a democracia social e os direitos humanos.
6. Reivindica-se que a autonomia é aquela que permite à universidade exercer seu papel crítico e propositivo frente à sociedade sem que existam limites impostos pelos governos, crenças religiosas, o mercado ou interesses particulares. A defesa da autonomia universitária é uma responsabilidade iniludível e muito atual na América Latina e o Caribe e é, ao mesmo tempo, uma defesa do compromisso social da universidade.
7. É necessário incluir como objetivo estratégico em consonância com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda de Desenvolvimento uma cobertura universal em educação superior gratuita. Essa educação tem que ir conjuntamente com uma revisão profunda dos procedimentos de acesso ao sistema, estabelecendo uma nova geração de políticas de ação afirmativa —baseada em gênero, etnia, classe e capacidades diferentes— para aumentar a inclusão social e a diversidade nas políticas de ingresso, permanência, formatura e titulação.



8. Expressamos nosso convencimento de que a educação superior pública na América Latina tem que ser gratuita e um dever do Estado, que tem a responsabilidade intransferível de garantir o ingresso e permanência dos estudantes na educação superior. A gratuidade, para estar completa, tem que ir acompanhada de fortes sistemas de assistência estudantil para estudantes de baixa renda e que vêm de regiões tradicionalmente marginadas.
9. É fundamental, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apresentados para 2030 que as tendências à mercantilização da educação sejam revertidas. Os ODS, e particularmente o que tem a ver com a educação superior, precisam do compromisso público e de um novo pacto que inclua como política do Estado um financiamento adequado das instituições de educação superior públicas.
10. Faz-se necessária a regulação da educação superior privada para garantir a qualidade da educação e dos direitos das pessoas que precisam dela. Existe uma diferença importante nas instituições da educação superior privadas entre as que foram criadas, principalmente nos últimos anos, com fins lucrativos de outras que fazem parte dos sistemas educativos. Para coadjuvar na qualidade da educação e com os ODS correspondentes, apresentamos a demanda de proibir a existência de instituições de educação superior com fins lucrativos em todos os países da região.
11. Existe demora na ALC na criação de conhecimento relacionada à pesquisa fundamental e principalmente em sua aplicação vinculada a processos de inovação em âmbitos sociais e produtivos. Resulta importante estabelecer como objetivo para a próxima década um programa de desenvolvimento estratégico científico e tecnológico concordado regionalmente, promovendo a pesquisa orientada a contextos de aplicação relacionados a problemas sociais, culturais e produtivos prioritários na região. Em consonância com isso, tem que se dar as condições para maior financiamento público para o desenvolvimento científico e tecnológico em cada um dos países da ALC.
12. Um aspecto fundamental no processo de regionalização/internacionalização da Universidade da ALC é que ela seja uma das bases principais na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. No tocante à regionalização-internacionalização pretendemos impulsionar e fortalecer a contribuição que as universidades da região dão ao processo de integração regional fazendo com que seus esforços (nacionais e regionais) se relacionem para a concreção do Espaço Latino Americano e do Caribe de Educação Superior - ENLACES, como espaço representativo da Educação superior da ALc. A CRES 2018 tem que estabelecer objetivos para seu desenvolvimento nos próximos anos.
13. Este aspecto aparece como central e iniludível para ser incorporado neste ponto 7 da CRES 2018. Tem a ver principalmente com o espírito reformista dos jovens do '18 que, desde sua perspectiva crítica e rebelde, expressavam uma universidade com capacidade de se pensar e se repensar a si mesma. Em nossos tempos, este extraordinário exercício de imaginar um futuro possível pode ser atingido a partir do nível de acordo regional que hoje é expresso na CRES 2018.
14. Queremos impulsionar a criação de um Programa de estudos e prospectivas da educação superior da ALC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em comemoração dos 100 anos da Reforma de Córdoba, a CRES 2018 ratifica os princípios declarativos a seguir: a educação superior como um bem público social - estratégico, um dever do Estado, um espaço do conhecimento, direito humano e universal; seu exercício aprofunda a democracia e permite a superação das desigualdades. Nela o compromisso com o ser humano se apresenta com seu contexto, com seu desenvolvimento em valores e ideais que inspirem uma cultura de paz, respeitando os direitos humanos em um ambiente de garantias democráticas no contexto dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

O princípio declarativo sobre a educação superior se conjuga no âmbito jurídico e os textos normativos da UNESCO, inscreve-se em uma rede de conceitos humanistas, com um enfoque de desenvolvimento humano e de mobilidade social, transformador da vida das pessoas e de sua realidade. Com a consideração e compromisso militante, exalta-se o acesso, igualdade, inclusão, qualidade, aprendizado e pertinência. São muitos os compromissos e desafios que temos que enfrentar e respondem ao firme propósito de consolidação de nossos sistemas e instituições.



CARTA RUIICAY PERANTE A CRES 2018

CARTA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

Córdoba, Argentina, 14 de junho de 2018

Universidade Autónoma Indígena Intercultural - UAIIN -, Colômbia; Universidade Indígena Intercultural Comunitária Produtiva Guarani e Povos de Terras Baixas “Apiaguaiki Tüpa” e Universidade Indígena Intercultural Produtiva Quechua “Casimiro Huanca” da Bolívia; Universidade Intercultural Amawtay Wasi, Equador; Consejo QOMPI e Centro Educativo Integral QATAXAC NAM QOMPI – IES – CESBI Pampa do Índio Chaco, Instituto de Educação Superior Intercultural “Gloria Pérez”, Argentina; Escritório dos Povos Indígenas da Universidade Nacional do Panamá, Panamá; Universidade das Regiões Autônomas da Costa Caribe Nicaraguense - URACCAN - e a Rede de universidades Indígenas Interculturais e Comunitárias de Abya Yala “RUIICAY”.

À Conferência Regional de Educação Superior CRES 2018:

Reunidos na celebração da CRES 2018 em Córdoba, Argentina, os dias 11, 12 e 13 de junho do ano 2018, as Universidades Indígenas Interculturais e Comunitárias participantes na Conferência “Interculturalidade e internacionalização desde os povos da América Latina e o Caribe” apresentada pela irmã Doutora Alta Hooker Reitora da URACCAN e Coordenadora da RUIICAY, e no Simpósio Eixo Temático: “Educação Superior, diversidade cultural e interculturalidade na América Latina” decidimos abrir um espaço de intercâmbio de experiências de nossas Universidades e instituições de educação indígena e afrodescendente, cujos resultados apresentamos a seguir:

1. Nosso reconhecimento aos organizadores da CRES 2018 por ter preparado a apresentação dos temas interculturalidade e diversidade cultural na educação superior na América Latina e o Caribe, o que nos permitiu manifestar nossa palavra e nossas próprias experiências de educação universitária que queremos aportar na CRES 2018.

2. Desde nossos Povos Indígenas e Afrodescendentes, a interculturalidade, vista como uma forma de promoção da diversidade cultural, os valores de nossas culturas milenares, permitiu dar importantes passos nas universidades convencionais durante as últimas décadas, por exemplo: programas específicos com conteúdo indígena, formação de profissionais interculturais, ações positivas em favor dos jovens, entre outros. No entanto, temos que declarar que persiste uma dívida histórica dos Estados e das IES com os povos indígenas e afrodescendentes que se evidencia no desconhecimento e desrespeito de nossas instituições educativas e culturais, a academia que nos torna objetos de pesquisa e não protagonistas, a perda cultural indígena dos que vão para as universidades, até a violência epistêmica ou a desvalorização de nossos conceitos e pedagogias indígenas, entre outras manifestações.
3. Dentro da celebração da CRES 2018, queremos dizer para os Estados e para os IES que, nas últimas décadas, nossas avós e avôs, pessoas sábias, e nossas comunidades e povos indígenas, em um esforço compartilhado com suas organizações sociais e autoridades comunitárias, como indivíduos de direito, começamos a reconstrução e recriação de nossas instituições educativas, sociais, culturais e de espiritualidade indígena e afrodescendente. Nossas universidades e instituições educativas com seus currículos e pedagogias, identidade e simbologia próprias, nascem interculturais reafirmando seu conteúdo e caráter indígena e afrodescendente enquanto buscam o acesso às outras culturas, sistemas educativos, idiomas, outros saberes, ciências e culturas, para uma formação pluricultural e intercultural, são processos educativos de pluridiversidade em crescimento.
4. Nossas universidades e instituições educativas foram criadas se baseando na constituição de nossos países, aplicando os convênios internacionais como o Convênio 169 da OIT, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a Declaração do Decênio dos Povos Afrodescendentes, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entre outros, e exercendo o direito universal dos povos de decidir sobre seu destino e suas futuras gerações. Contudo, apenas alguns Estados reconhecem a institucionalidade e apoiam financeiramente nossas Universidades e instituições educativas, em outros casos, o processo está se iniciando, e em outros inúmeros casos, os Estados e as IES não reconhecem, não respeitam. De todas formas existem, são criadas e crescem numerosas instituições de educação própria dos povos indígenas e afrodescendentes que se tornam integrantes da riqueza cultural e educativa de nossos países.
5. Estamos convencidos de que os Estados e as IES dentro da interculturalidade caminham até um diálogo de saberes, povos e culturas, que é um processo que passa pelo reconhecimento e respeito das universidades e instituições de educação



indígenas e afrodescendentes, de seus sistemas jurídicos, de saúde e de produção alimentar, de seus idiomas próprios à implementação de esforços conjuntos na formação de profissionais interculturais que reafirmam e reforçam sua identidade cultural indígena e afrodescendente ao mesmo tempo que são profissionais formados nas universidades convencionais, e outras ações que tem que buscar a eliminação do racismo contra os povos indígenas e afrodescendentes e qualquer outra forma de desigualdade que prejudica nossas sociedades.

6. Defendemos a cultura da tolerância, solidariedade, irmandade entre nossos povos e comunidades e de harmonia com a mãe terra, nossos territórios e seus bens naturais que fazem parte dos conteúdos de nossas universidades e instituições educativas cujo objetivo é educar para a vida e para o bem viver de nossos povos, recuperar a solidariedade desde nossas cosmovisões e pedagogias, sonhos e esperanças, e formas de avaliação e acreditação, exercendo nosso direito à educação como bem público e social, um direito humano universal e uma obrigação dos Estados e das IES a quem assiste uma responsabilidade institucional de apoiar e acompanhar para harmonizar conjunta e respeitosa, ambos os processos educativos e culturais.

Fechando nossa mensagem para a CRES 2018, valorizamos e apoiamos os esforços da Comunidade Indígena QOM e outros Povos Indígenas e Afrodescendentes da Argentina e de toda nossa América que estão buscando reconstruir suas universidades ou diferentes maneiras de institucionalidade educativa própria, reiteramos nosso reconhecimento à oportunidade de ter apresentado nossa palavra e experiência de educação própria, e expressamos nosso compromisso de continuar participando com ações e propostas no diálogo entre saberes que promove a Conferência Regional de Educação Superior CRES 2018

Córdoba, Argentina, 14 de junho de 2018.

Apresentada na assembleia da III Conferência Regional de Educação Superior celebrada na Universidade Nacional de Córdoba, aos 14 dias do mês de junho de 2018.